



Ministerio de Transporte  
República de Colombia  
NIT. 899.999.055-4

Prosperidad  
para todos

MEMORANDO

20121330101753



12-06-2012

Bogotá, 12-06-2012

PARA: Doctor FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
Subdirector Administrativo y Financiero encargado de las funciones del Secretario General

DE: Jefe Oficina Asesora de Jurídica

ASUNTO: Remisión Prórroga Contrato 147 de 2011.

De manera atenta envió para su consideración y posterior firma el proyecto de prórroga al contrato objeto de la referencia, suscrito entre el Ministerio y el Abogado IVAN DARIO GOMEZ LEE.

Atentamente,

NAZLY JANNET DELGADO VILLAMIL

Anexos: Jca (1) Carpeta

Copias: Consecutivo Grupo Contratos -- Contrato 147 de 2011

Proyectó:	Salomón Strusberg
Revisó:	Isabel Cristina Vargas Simoes
Fecha de elaboración:	12 de junio de 2012
Radicado que responde:	20121330101753
Tipo de respuesta:	Total (X) Parcial ( )

**PRORROGA AL CONTRATO NÚMERO 147 DE 2011, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y IVAN DARIO GÓMEZ LEE.**

**OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA JURÍDICA PARA ADELANTAR LA FIJACIÓN DE POLÍTICAS Y LA REGLAMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-2014, EN LO RELACIONADO CON EL SECTOR TRANSPORTE.**

**PLAZO: CINCO (05) DÍAS**

Entre los suscritos: **FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ** identificado con la cédula de ciudadanía número 10.271.613 expedida en Manizales, Caldas, en su condición Subdirector Administrativo y Financiero encargado de las funciones de la Secretaría General, según Decreto número 1079 del 23 de mayo de 2012 quien obra en nombre y representación del **MINISTERIO DE TRANSPORTE**, facultado al respecto por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 sus decretos reglamentarios y la Ley 489 de 1998, el Decreto 087 del 17 de enero de 2011 y la Resolución número 003676 del 26 de septiembre de 2011, quien en adelante se denominará **MINISTERIO**, facultado para celebrar la presente prórroga en virtud de la delegación conferida por la Resolución número 3676 del 26 de septiembre de 2011, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO** por una parte y por la otra **IVAN DARIO GÓMEZ LEE**, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.410.929 expedida en Bogotá, quien actúa quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente prórroga al Contrato N° 147 de 2011 el cual se registró por las cláusulas que posteriormente se estipulan, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el día 02 de diciembre de 2011 se celebró entre las partes el Contrato número 147 de 2011, por medio del cual se pactó el siguiente objeto: "Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional De Desarrollo 2012-2014, en lo relacionado con el sector Transporte" 2) Que en virtud de lo estipulado en la Cláusula Segunda del Contrato, el plazo de ejecución del contrato es de seis (06) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación, firmada entre el supervisor designado por el **MINISTERIO** y el **CONTRATISTA** 3) Que mediante comunicación de junio 08 de 2012 el Contratista solicitó una prórroga de cinco (5) días al plazo de vigencia establecido en la cláusula cuarta del contrato principal argumentando que *Dado que para la semana entre el 12 y el 15 de junio del presente año se tiene previsto reunión en el Ministerio de Transporte para hacer la presentación del proyecto del decreto reglamentario en materia de expropiaciones, se hace necesaria la prórroga del contrato 147 de 2011 en cinco días hábiles* 4) Que el Comité de Licitaciones y Contratos de sesión del 12 de junio de 2012 acogió los argumentos expuestos en la solicitud realizada por la Interventoría del contrato, con base en las peticiones formuladas por el Contratista y en consecuencia aprobó la solicitud de prórroga según consta en Acta Número 024 del 12 de junio de 2012 inclusive 5) Que en atención al oficio en mención mediante Acta de fecha 12 de junio de 2012 se solicitó por parte de la Interventoría del contrato la prórroga del plazo del contrato mediante Memorando Interno Número 20121200101423 de fecha 12 de junio de 2012 suscrito por el Jefe de Planeación 6) Que en mérito de lo anteriormente expuesto las partes acuerdan **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:** Prórroga el término de ejecución estipulado en la Cláusula Segunda del contrato 147 de 2011

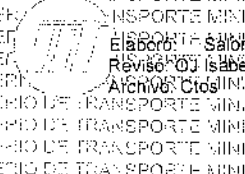
por el término de cinco (5) días más. **CLAUSULA SEGUNDA.-** La firma de la presente prórroga no genera ninguna erogación adicional al valor inicialmente pactado en el Contrato. **CLAUSULA TERCERA.- AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS.- EL CONTRATISTA** se compromete a ampliar la vigencia de los amparos de la garantía constituida en virtud de lo estipulado en la Cláusula Séptima del Contrato, de conformidad con lo pactado en la presente prórroga. **Número uno (1). CLAUSULA CUARTA.- VIGENCIA:** Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato N° 147 de 2011 permanecerán vigentes y conservarán todo su vigor y efecto en cuanto no contravengan lo dispuesto en el presente documento. **CLAUSULA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO:** Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los doce (12) días del mes de junio de 2012.

**EL MINISTERIO:**

  
**FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
Encargado de las funciones Secretaria General

**EL CONTRATISTA:**

  
**IVAN DARIO GOMÉZ LEE**  
Contratista

  
Elaboró: Salomón Strusberg  
Revisó: OT Isabel Cristina Vargas Sinisterra  
Archivó: Cidol



Ministerio de Transporte  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

MEMORANDO

20121210106623



Fecha: 20-06-2012

**PARA Dr., CESAR A. AMORTEGUI FUENTES. Coordinador Grupo Contabilidad**

**DE Interventor Contrato Prestación Servicios Profesionales No. 147 de 2011**

ASUNTO: Contrato de prestación de Servicio No. 147 de 2011

Para su información y fines pertinentes me permito remitir la factura y demás soportes del Contrato 147 de 2011, a nombre de Iván Darío Gómez Lee, correspondiente al periodo del comprendido entre el 12 de Abril de 2012 - 11 de Mayo de 2012, cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el sector transporte".

Anexo:

- Acta No. 06 Recibo Parcial
- Factura
- Planillas de Aportes a salud y pensión
- Declaración Juramentada de aportes
- Informe Parcial

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO POR  
Wilde Alexander Coronado M.

**WILDE ALEXANDER CORONADO MOLANO**


c.c. Isabel Cristina Vargas Sinisterra Coordinadora Grupo Contratos ✓

Anexo: Lo enunciado

JS  
22/06/12

445

211

	UNIDAD EJECUTORA	FIS - 018	
	DEPENDENCIA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	HOJA 1 de 2	
		FECHA	
		15	5 2012

ACTA No. 06  
 RECIBO PARCIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS  
 CORRESPONDIENTES AL MES: 12 DE ABRIL DE 2012 A 11 DE MAYO DE 2012

CONTRATO No. 147 DE 2011

**OBJETO DEL CONTRATO**

Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el sector transporte

**CONTRATISTA** IVAN DARIO GÓMEZ LEE C.C. No. 80.410.929  
(Escriba No de NIT y/o Cédula, nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR y/o SUPERVISOR** WILDE ALEXANDER CORONADO MOLANO c.c. No. 79.629.630  
(Escriba No de NIT y/o Cédula, nombre o razón social del interventor y/o supervisor)

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** Seis (6) meses

**PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO** \_\_\_\_\_

**VALOR INICIAL** \$ 75.000.000, incluido IVA

**VALOR ADICIONAL** \_\_\_\_\_

**VALOR TOTAL** \$ 75.000.000, incluido IVA

**PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO** Seis (6) meses  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**GARANTIAS**

AMPARO	No POLIZA O SU EQUIVALENTE (decreto 4828/2008)	VIGENCIA	CIA ASEGURADORA o SU EQUIVALENTE (decreto 4828/2008)
Cumplimiento del contrato de prestación de servicios	11-44-101028319	Desde 02/12/2011 Hasta 07/10/2012	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

En Bogotá, a los quince ( 15 ) días del mes de MAYO de 2012, se reunieron IVAN DARIO

GÓMEZ LEE Contratista, y WILDE ALEXANDER CORONADO MOLANO, Supervisor para dejar constancia  
(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) (Nombre del representante legal o delegado de la firma interventora)

por medio de la presente acta del recibo de los trabajos ejecutados por el contratista



UNIDAD EJECUTORA

DEPENDENCIA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

FIS - 018

HOJA 1 de 2

FECHA

15

5

2012

## TRABAJOS REALIZADOS Y ENTREGADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
INFORME	1	ESCRITO	12.500.000,00	12.500.000,00	ANEXO

VALOR TRABAJOS REALIZADOS	10.775.862,00
IVA ( % )	1.724.138,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	12.500.000,00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA:

DDCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

% EJECUTADO DE RECURSOS A LA FECHA 83 % DE AVANCE FISICO 83%

NOTA: El recibo por parte de la interventoría y/o supervisor de los trabajos ejecutados no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones contractuales.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo parcial los que en ella intervinieron a los quince días del mes de Mayo de 2012.

(Firma)

(Nombre)

Iván Darío Gómez Lee  
Contratista

(Firma)

(Nombre)

Wilfrido Alexander Caranado  
Supervisor

Original: Oficina Jurídica

Copia: Interventor y Supervisor

Copia: Contratista

Copia: Unidad Ejecutora

**IVAN DARIO GÓMEZ LEE**

Abogado Experto en Contratación y Control  
Carrera 13 No. 96-67 Of. 503 Tel: 805 2019 Bogota, D.C.

NIT. 80410929-7 Régimen Común  
Resolución DIAN 320000814428 de  
Fecha 16/08/2011 Numeración  
Autorizada IG 01 al IG 1000

**FACTURA DE VENTA**

**No. IG 0077**

FECHA: 12 de mayo de 2012

SEÑORES: Ministerio de Transporte

DIRECCIÓN: Avenida El Dorado C.A.U

TELÉFONO: 324 0800

NIT/C.C. 899.999.055-4

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Quinto pago Contrato de Prestación de Servicios P. 147 de 2011		12.500.000

Impreso en COM ESTADOS SA 15.352.114.17 318 928

Queda por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su de acuerdo al Artículo 640 del C. de C. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o prestación del servicio.

SUBTOTAL \$	10.775.862
IVA	1.724.138
TOTAL \$	12.500.000

SON: Doce millones quinientos mil pesos M/cte

IVAN DARIO GÓMEZ LEE

FIRMA RECIBIDA NIT/CC.

Iván Darío Gómez Lee

## INFORME DE LABORES

### CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 147 de 2011

**CONTRATO** No: 147 de 2011  
**CONTRATISTA:** Iván Darío Gómez Lee  
**PERIODO:** 12 de abril a 11 de mayo de 2012  
**SUPERVISOR:** Wilde Alexander Coronado Molano

#### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en lo relacionado con el sector transporte.

#### OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

1. Constituyen derechos y deberes del **CONTRATISTA**, para efectos del presente contrato los contenidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
2. El contratista se obliga al cumplimiento oportuno de todas las normas laborales legales y convencionales vigentes.
3. El contratista deberá cumplir con el desarrollo de las siguientes actividades:
  - a. Preparación de los Proyectos de actos administrativos requeridos para reglamentar lo relativo a la expropiación, redes de servicios públicos y sistemas inteligentes de transporte de la Ley 1450 de 2011, y los demás que sean requeridos por el supervisor del contrato.
  - b. Asistir a las mesas de trabajo que fijen las posiciones institucionales o sectoriales y proyectar las actuaciones que se requieran, revisar jurídica e institucionalmente las propuestas de este grupo.
  - c. Preparar la reglamentación que solicite el señor Ministro de Transporte y participar en las reuniones de análisis y mejoramiento de los mismos.
  - d. En cumplimiento del objeto contractual, ejecutará las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.



- e. Rendir informes mensuales por escrito al supervisor del contrato sobre las actividades adelantadas y de su gestión

**LABORES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:**

Por medio del presente hago entrega del quinto informe de actividades contractuales de acuerdo con el contrato N° 147 de 2011 suscrito con el Ministerio de Transporte. Este informe está compuesto por las obligaciones del mencionado contrato, una lista de actividades específicas y generales realizadas, la factura y los anexos respectivos. La relación de actividades es la siguiente:

Asistí a una reunión el 14 de abril de 2012, con el Dr. Edgar Chacón, de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, con el objeto de debatir algunos puntos importantes que debían ser incluidos en el texto final del Decreto.

Asistí a la reunión del 17 de abril de 2012 en el Ministerio de Transporte, con el Dr. Edgar Chacón, asesor jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, la Dra. Constanza García, viceministra de infraestructura, el Dr. Gian Carlo Suescun del Ministerio de Transporte y varios representantes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, en la cual fueron debatidos tres puntos principalmente en relación con la propuesta final del proyecto del articulado del decreto para la adquisición de bienes inmuebles para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, estos fueron: 1) La aplicación dual de la expropiación administrativa y de la judicial en los eventos de adquisición de inmuebles para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte; 2) Aplicación del nuevo procedimiento administrativo especial de expropiación para aquellos proyectos que se encuentran en ejecución con anterioridad a la expedición de la Ley 1450 de 2011 y 1474 de 2011; y 3) Fortalecimiento y cooperación de entidades como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER y la Dirección Nacional de Estupefacientes –DNE, con el fin de acelerar la adquisición de bienes que se encuentran a disposición de tales entidades, cuando los bienes inmuebles hagan parte de las coordenadas del proyecto de infraestructura de transporte.

De conformidad con lo expuesto en la reunión antes mencionada, elaboré una propuesta definitiva del articulado del decreto, en la cual se consolidaron los comentarios y observaciones propuestos por los funcionarios que asistieron a la reunión del 17 de abril en las instalaciones del Ministerio de Transporte. Lo anterior con la finalidad de que el gobierno nacional expida un decreto para asegurar la ejecución de las disposiciones contenidas en el artículo 83 de la Ley 1450 y en el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, la cuales regulan un procedimiento administrativo especial en materia de expropiación de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.

ESTADO DE CALIFICACIÓN  
2/5  
Iván Darío Gómez Lee

Así mismo, luego de ser aprobado el texto final del articulado del decreto por parte de las entidades del sector transporte, se elaboró un oficio dirigido a la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 39 del Decreto-ley 19 de 2012, disposiciones según las cuales para la creación de un trámite que afecte a los ciudadanos en las entidades del orden nacional, es necesario que la entidad justifique ante el DAFP la creación del trámite con el fin de obtener un concepto favorable para implementar el procedimiento respectivo. En dicho oficio se hace un estudio de los antecedentes, de la estructura del decreto y de la técnica jurídica utilizada la cual comprende: 1) Un análisis de régimen jurídico de la expropiación; 2) Una investigación de las normas que son aplicables en materia de expropiación para proyectos de infraestructura de transporte; 3) La articulación del nuevo decreto con el Código Contencioso Administrativo, Decreto-ley 01 de 1984 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011; 4) La regulación del tema de los avalúos en el marco del Código Civil; y 5) La aplicación de la Ley 80 de 1993, y en general de las normas que conforman el Estatuto General de Contratación Pública en Colombia.

Por último se elaboró un oficio con la misma estructura que al anterior, dirigido a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, con el fin de dar trámite al respectivo texto del decreto para que sea sancionado por el Presidente de la República, en uso de la potestad reglamentaria.

## ANEXOS

Anexo 1:

- Documento con los respectivos soportes, del presente informe.

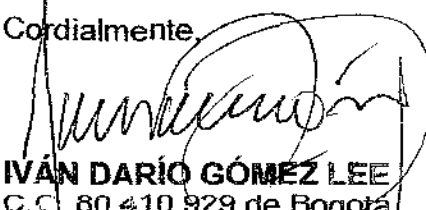
Anexo 2:

- Factura N° 77 por valor de \$12.500.000

Anexo 3:

- Formato pago de seguridad social

Cordialmente,

  
**IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE**  
C.C. 80.410.929 de Bogotá

**ANEXOS:**

**1. PROPUESTA DE ARTICULADO DEFINITIVA**

**DECRETO**

Por el cual se reglamentan la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1474 de 2011, que crearon el procedimiento administrativo especial de expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura de transporte

**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA**

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el numeral 5 del artículo 83, los artículos 245 y 246 de la Ley 1450 de 2011, y el numeral 5 del parágrafo 1º del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, y,

**CONSIDERANDO:**

Que la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, en el artículo 83 creó el procedimiento administrativo especial de expropiación de bienes inmuebles para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte aplicable a nivel nacional y territorial. Así mismo sus artículos 245 y 246 se refieren a diversos asuntos de esta actuación administrativa.

Que a su vez la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, en el parágrafo 1º del artículo 87 también se refiere a la creación de este procedimiento administrativo especial de expropiación de bienes inmuebles para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, en idénticos términos referidos en la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.

Que el procedimiento de expropiación administrativa además de estar contemplado en el artículo 58 de la Constitución Política, también se orienta por las disposiciones generales, aplicables a esta materia y deben observar las garantías fundamentales del debido proceso y las normas generales del procedimiento contempladas en el Código Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a las cuales se hará remisión en el presente reglamento.

Que para efecto de la racionalización de los trámites y de los procedimientos administrativos a que se refiere el artículo 39 del Decreto-Ley 19 de 2012 y el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, el texto del presente decreto se puso a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de justificar la necesidad de implementar este nuevo procedimiento administrativo especial.

#### DECRETA:

**ARTÍCULO 1. PROCEDIMIENTOS LEGALES DE EXPROPIACIÓN Y FUENTES NORMATIVAS APLICABLES.** De conformidad con la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1474 de 2011, además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, para efectos de decretar su expropiación declárese de utilidad pública o interés social los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.

En virtud de lo anterior, las actuaciones establecidas en el artículo 83 de la Ley 1450 de 2011 y en el párrafo 1º del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, corresponden a un procedimiento administrativo especial de expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura de transporte, que se rige por estas normas especiales.

La modalidad de expropiación prevista en Ley 9 de 1989, en la Ley 388 de 1997 y demás normas generales en materia de expropiación, que prevé la negociación de inmuebles y la intervención judicial, también serán aplicables para proyectos de infraestructura de transporte. En materia de avalúos y peritazgos es un asunto que se somete en su integridad a las disposiciones especiales de la Ley 1450 de 2011 y a este reglamento, según lo dispuesto por el artículo 246 de esta ley.

También será aplicable la expropiación judicial prevista en el artículo 110 del Capítulo III del Decreto-Ley 222 de 1938, norma que se mantiene vigente.

Serán aplicables el Código Contencioso Administrativo Decreto-Ley 01 de 1984 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, en lo que no regulen estas leyes, todo lo anterior en consonancia con el artículo 58 de la Constitución Política.

**ARTICULO 2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL.** En cumplimiento del artículo 83 de la Ley 1450 de 2011 y del párrafo 1º del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, las etapas del procedimiento administrativo especial de expropiación para proyectos de infraestructura de transporte son las que se establecen a continuación y que se reglamentan en materia de competencias y especificaciones técnicas de las entidades del ejecutivo que deberán aplicar los procedimientos legales establecidos.

1. La entidad responsable del proyecto expedirá una resolución mediante la cual determine de forma precisa las coordenadas del proyecto; esa misma resolución será el acto administrativo mediante el cual se hace la declaratoria de utilidad pública o interés social para adelantar ese proyecto de infraestructura de transporte.
2. La publicación de la resolución a que se refiere el numeral anterior se realizará de conformidad con las disposiciones legales de publicidad de los actos administrativos contenidas en el Código Contencioso Administrativo Decreto-Ley 01 de 1984 y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, según sea el caso.
3. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC o la entidad competente, que para los efectos de aplicar esta ley en el nivel territorial son los catastros descentralizados; en los dos (2) meses siguientes a la publicación de la resolución de que trata el numeral anterior, procederá a identificar los predios que se ven afectados por el proyecto y ordenará registrar la calidad de predios de utilidad pública o interés social en los respectivos registros catastrales y en los folios de matrícula inmobiliaria, quedando dichos predios fuera del comercio a partir del mencionado registro.
4. Efectuado el registro de que trata el numeral anterior, en un término de seis (6) meses el IGAC o los catastros descentralizados, con cargo a recursos de la entidad responsable del proyecto o del concesionario, realizará el avalúo comercial del inmueble y lo notificará a ésta, al propietario o propietarios y demás interesados acreditados.
5. El avalúo de que trata el numeral anterior deberá incluir el valor de las posesiones si las hubiere y de las otras indemnizaciones o compensaciones que fuere del caso realizar, por afectar dicha declaratoria el patrimonio de los particulares.
6. Se realizará la notificación del avalúo a la entidad responsable del proyecto, al propietario o propietarios y demás interesados que se hubieren acreditado como tales desde el momento en que se hace la publicación de la resolución mediante la cual se declara la utilidad pública o interés social para la ejecución de un proyecto de infraestructura de transporte, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo Decreto-Ley 01 de 1984 y en los artículos 66 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, según sea el caso.
7. La notificación prevista en el numeral anterior se realizará a la dirección de los propietarios que se hubieren identificado en los folios de matrícula inmobiliaria, a las direcciones que los terceros interesados acrediten al momento de hacerse parte de la actuación y a otras direcciones que se conozcan en la fase de identificación de predios; con lo anterior, se dará aplicación a las normas legales que sobre notificación de actos individuales y particulares están previstas en los artículos 44 y 45 del Código

- Contencioso Administrativo Decreto-Ley 01 de 1984 y en los artículos 66 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, según sea el caso.
8. Si en el avalúo se hace referencia expresa a que el mismo puede afectar a terceros de quienes se desconoce su domicilio, se ordenará publicar la parte resolutive del mismo, la ubicación de cada inmueble y su valor, en la página electrónica de la entidad, en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones, así mismo, se dispondrá la publicación en el diario oficial o en las gacetas territoriales, respectivamente. Lo anterior en aplicación del artículo 46 del Código Contencioso Administrativo Decreto-Ley 01 de 1984 o del artículo 73 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, según sea el caso.
  9. Los propietarios o los interesados acreditados podrán interponer los recursos de ley contra el avalúo del IGAC o de los catastros descentralizados, en los términos que disponen los artículos 50 a 55 del Código Contencioso Administrativo Decreto-Ley 01 de 1984 y en los artículos 74 a 81 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, según sea el caso.
  10. En firme el avalúo la entidad responsable del proyecto o el contratista si así se hubiere pactado, pagará dentro de los tres (3) meses siguientes, las indemnizaciones o compensaciones a que hubiere lugar. En los casos que exista concesión el pago podrá realizarse con los recursos del concesionario.
  11. Si el particular recibe el pago se entiende que existe mutuo acuerdo en la negociación y transacción de posibles indemnizaciones futuras, en este evento, se entenderá agotada la enajenación del inmueble en forma voluntaria. El acuerdo de las partes se elevará a escritura pública de conformidad con las normas civiles aplicables.
  12. Efectuado el pago por mutuo acuerdo, se procederá a realizar el registro del predio a nombre del responsable del proyecto ratificando la naturaleza de bien como de uso público o interés social, el cual gozará de los beneficios del artículo 63 de la Constitución Política.
  13. De no ser posible el pago directo de la indemnización o compensación, se expedirá un acto administrativo de expropiación por parte de la entidad responsable del proyecto y se realizará el pago por consignación a órdenes del juez o Tribunal Contencioso Administrativo competente, acto con el cual quedará cancelada la obligación.
  14. El pago se dispondrá a nombre de los titulares de los derechos respecto de cada inmueble.
  15. De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 62 de la Ley 388 de 1997 y con las disposiciones generales para la expropiación, la resolución de expropiación será el título con fundamento en el cual se procederá al registro del predio a nombre de la entidad responsable del

122

- proyecto y que, como bien de uso público o interés social, gozará de los beneficios del artículo 63 de la Constitución Política.
16. Como lo señala el numeral 2 del artículo 62 de la Ley 388 de 1997 contra la resolución que ordene la expropiación solo procederá el recurso de reposición y transcurridos quince (15) días sin que se hubiere resuelto el recurso se entenderá negado. El anterior recurso deberá interponerse en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo Decreto-Ley 01 de 1984 o en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, según sea el caso.
  17. Las personas objeto de indemnización o compensación tendrán el derecho de acudir ante los jueces contencioso administrativos, para demandar el valor de las mismas en cada caso particular.
  18. La entidad responsable del proyecto deberá notificar a las personas objeto de la indemnización o compensación, que el pago de la misma se realizó. Una vez efectuada la notificación, dichos sujetos deberán entregar el inmueble dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. La notificación se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo Decreto-Ley 01 de 1984 y en los artículos 66 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
  19. En el evento en que las personas objeto de indemnización o compensación no entreguen el inmueble dentro del término señalado, la entidad responsable del proyecto presentará las acciones de desalojo procedentes.
  20. Para efectos de lo previsto en el numeral anterior la autoridad de policía adelantará en forma inmediata el procedimiento especial de restitución de bien de uso público de conformidad con lo previsto en el artículo 132 del Código de Policía Nacional Decreto-Ley 1355 de 1970 y demás normas que resulten aplicables.

**PARÁGRAFO 1.** El presente decreto podrá aplicarse a proyectos de infraestructura de transporte que estén contratados o en ejecución al momento de expedición de la Ley 1474 de 2011 en los cuales se hubieren vencido los plazos legales o contractuales, así mismo, cuando no se hayan alcanzado los resultados esperados.

**PARÁGRAFO 2.** El avalúo comercial del inmueble requerido para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, en la medida en que supere en un 50% el valor del avalúo catastral, podrá ser utilizado como criterio para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles que fueren desenglobados como consecuencia del proceso de enajenación voluntaria o expropiación judicial o administrativa.

**PARÁGRAFO 3.** En virtud de la Ley 1474 de 2011 cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en forma previa a la apertura del proceso de selección o a la firma del contrato, la entidad contratante deberá contar

con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental.

**ARTÍCULO 3. LA RESOLUCIÓN DE COORDENADAS DEL PROYECTO.** Como consecuencia de las disposiciones legales aplicables en esta materia, la resolución mediante la cual se identifican las coordenadas del proyecto y que se refiere a la declaratoria de utilidad pública o interés social para adelantar el proyecto de infraestructura de transporte, contendrá como mínimo la siguiente información:

1. La identificación de la entidad responsable del proyecto, el porcentaje de participación pública o estatal, su representante legal con indicación de nombres y apellidos, documento de identidad y dirección para notificaciones.
2. Expresar la relación que tiene el proyecto con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y su carácter de utilidad pública e interés social.
3. La identificación del proyecto de infraestructura de transporte, señalando las entidades territoriales donde se desarrollará y determinando las coordenadas precisas del mismo mediante el sistema de referencia MAGNA SIRGAS.
4. La entidad responsable del proyecto aportará como anexo de la resolución la información básica del mismo, que contendrá entre otros los siguientes aspectos: La ficha predial de infraestructura de transporte, el levantamiento topográfico y la ficha social para el caso de las compensaciones.
5. La orden de publicar la resolución en los términos del Código Contencioso Administrativo Decreto-Ley 01 de 1984, y del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, según sea el caso, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
6. Firma del representante legal de la entidad responsable del proyecto.

**PARÁGRAFO 1.** Se podrán celebrar los contratos interadministrativos que sean necesarios entre la entidad responsable del proyecto, los concesionarios y el IGAC o los catastros descentralizados, con recursos a cargo de la entidad responsable del proyecto o de los concesionarios, con el objeto de cubrir los costos de los avalúos y demás actuaciones jurídicas y técnicas que requieran adelantar estas entidades o empresas. De igual forma en estos contratos se determinarán los medios para prestar la colaboración interinstitucional que sea procedente. Para estos efectos se adjuntarán los estudios de conveniencia y oportunidad y el certificado de disponibilidad presupuestal o el documento que haga sus veces. Igualmente con otras entidades públicas que sean titulares o administradores de bienes inmuebles.

**PARÁGRAFO 2.** Cuando se requieran mayores detalles topográficos sobre los predios del área del proyecto el IGAC o los catastros descentralizados lo solicitarán a la entidad responsable. En aquellos eventos que se requiera, la entidad responsable del proyecto también incorporará el estudio técnico sobre las



áreas remanentes en predios afectados parcialmente por el proyecto de infraestructura de transporte que contendrá las cantidades de obra.

**ARTÍCULO 4. AJUSTES A LA RESOLUCIÓN DE COORDENADAS DEL PROYECTO.** Cuando las circunstancias del proyecto lo ameriten, la entidad responsable ajustará el área de influencia del proyecto. Para efecto de lo anterior se expedirá acto administrativo que se ajustará al procedimiento legal y complementará o modificará el acto de declaratoria del motivo de utilidad pública o interés social, indicando con precisión las nuevas coordenadas en el sistema de referencia *MAGNA SIRGAS*, con el propósito de continuar la actuación en el área de influencia adicionada con las mismas reglas establecidas para el área original.

**PARÁGRAFO.** En el evento de presentarse situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o de interés general que impidan darle continuidad total o parcial a un proyecto de infraestructura de transporte que tenga declaratoria de utilidad pública o interés social, podrá la entidad responsable del mismo revocar de manera directa y sin trámite adicional la afectación de utilidad pública o interés social, de unos o de varios de los inmuebles.

**ARTÍCULO 5. IDENTIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES.** Para la identificación y registro de los bienes inmuebles que se vean afectados por el proyecto de infraestructura de transporte que se vaya a desarrollar, el IGAC o los catastros descentralizados, agotarán el siguiente procedimiento interno:

1. Analizar las coordenadas y la información aportada por la entidad responsable del proyecto, contrastándola con la incorporada en sus bases de datos.
2. Si se advierten diferencias entre la información aportada y la incorporada en sus bases de datos, el IGAC o los catastros descentralizados ordenarán la inspección al bien o a los bienes inmuebles afectados por el proyecto que deban identificarse y si a ello hubiere lugar actualizará la base de datos catastral o solicitará la corrección de las matrículas inmobiliarias. Del trámite de estas actuaciones y de sus resultados, el IGAC o los catastros descentralizados informarán a la entidad responsable del proyecto. La inspección a los bienes inmuebles se realizará de acuerdo con las normas técnicas emitidas por el IGAC para el reconocimiento predial.
3. Con la información entregada por la entidad responsable del proyecto y el resultado de la inspección practicada al bien o a los bienes inmuebles, el IGAC o los catastros descentralizados actualizarán sus bases de datos en cuanto al elemento físico y jurídico e inscribirán en ellas el carácter de bien o bienes inmuebles de utilidad pública o interés social. Igualmente solicitará el registro de esa misma condición en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que correspondan.

4. Una vez el bien o bienes inmuebles sean identificados por el IGAC o los catastros descentralizados, la entidad responsable del proyecto comunicará tal hecho a las oficinas de planeación respectivas para que tengan en cuenta dicha situación en sus actuaciones urbanísticas.

**ARTÍCULO 6. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL VALOR DEL PRECIO.** En desarrollo de la facultad prevista en los numerales 4º y 5º del párrafo 1º del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en los numerales 4º y 5º del artículo 83 y 246 de la Ley 1450 de 2011, así como de las normas civiles aplicables, la determinación del valor del precio de adquisición o precio indemnizatorio tendrá en cuenta el daño emergente y el lucro cesante. Dentro del daño emergente están comprendidos conceptos relativos a los perjuicios y pérdidas dentro de lo cual están comprendidos entre otros: El avalúo comercial de los inmuebles; los gastos notariales y de registro; la desconexión y cancelación de servicios públicos; el traslado de bienes, enseres, maquinaria y equipos, y gastos de publicidad para comunicar el traslado de la actividad económica que se venía desarrollando en el inmueble objeto de adquisición. En el lucro cesante referido a la ganancia o provecho que deja de reportarse, se contemplan entre otros: La utilidad neta por actividad económica y la renta asociada al inmueble objeto de adquisición.

En desarrollo de lo anterior, la determinación del avalúo comercial de los bienes inmuebles tendrá en cuenta: El valor de las posesiones si las hubiere; su localización; sus condiciones físicas y jurídicas; la reglamentación urbanística o de usos del suelo vigente a la fecha de publicación de la resolución a que se refiere el artículo 3 de este decreto; la destinación económica de los inmuebles; para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad; para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada uno de ellos; en caso de que se afecte parcialmente el inmueble objeto del avalúo y que requiera de la ejecución de obras de adecuación para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se determinará en forma independiente y se adicionará al valor de la parte afectada del inmueble; cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado, el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho inmueble el valor de reproducción, entendiéndose por tal el producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le han introducido; y la estratificación socio económica.

En el avalúo no se tendrán en cuenta las mejoras efectuadas con posterioridad a la fecha de publicación del acto administrativo a que se refiere el artículo 3 de este decreto.

La determinación de las compensaciones sociales tendrán en cuenta los siguientes factores: Restablecimiento de vivienda; apoyo a moradores y restablecimiento de servicios sociales básicos.

**PARÁGRAFO 1.** En los procedimientos que se hubieren acordado en el marco de los compromisos con los organismos multilaterales de créditos se continuará dando aplicación a los mismos, salvo que de común acuerdo con esas entidades se adopten procedimientos ajustados al presente decreto y las leyes que el mismo reglamenta.

**PARÁGRAFO 2.** Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha en que quedo en firme. Dentro del término de la vigencia del avalúo, no se podrá solicitar nuevamente el mismo.

**ARTICULO 7. SANEAMIENTO AUTOMÁTICO.** En aplicación del artículo 245 de la Ley 1450 de 2011 los Registradores de Instrumentos Públicos tendrán en cuenta que la adquisición de inmuebles por los motivos de utilidad pública e interés social consagrados en esa ley gozará del saneamiento automático en favor de la entidad pública respecto a su titulación y tradición, frente a aquellos posibles vicios en los títulos que aparezcan durante el proceso de adquisición o con posterioridad al mismo. Dichos vicios originan por ministerio de la ley acciones indemnizatorias que podrán dirigirse contra cualquiera de los titulares inscritos en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria diferentes a la entidad pública adquirente.

**ARTÍCULO 8. RÉGIMEN DE LOS PERITAZGOS Y AVALÚOS.** En aplicación del parágrafo del artículo 246 de la Ley 1450 de 2011, los peritazgos practicados dentro de los procesos de expropiación judicial o administrativa deberán partir del avalúo practicado con fundamento en la reglamentación vigente del Gobierno Nacional o aquella que la sustituya, de conformidad con lo previsto en este decreto y las normas que reglamenta, así como, en las normas metodológicas que en cumplimiento de su mandato legal sean adoptadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.

En todo caso, el valor indemnizatorio deberá fundamentarse en los perjuicios alegados y probados por quien solicita el resarcimiento.

En caso de preverse el pago de compensaciones dentro de planes de gestión social, estas sumas se considerarán excluyentes con el valor indemnizatorio que

en sede administrativa o judicial se llegare a pagar, y de haber ocurrido el pago deberá procederse al descuento.

**ARTÍCULO 9. VIGENCIA.** El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

## **2. OFICIO DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA –DAFP**

Bogotá D.C., mayo de 2012

Doctora

**ELIZABETH RODRÍGUEZ TAYLOR**

Directora

Departamento Administrativo de la Función Pública

Ciudad

**Asunto:** Justificación de la necesidad de implementar un nuevo procedimiento administrativo especial en materia de expropiación de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.

Respetada doctora Elizabeth:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, según el cual para la creación de un trámite que afecte a los ciudadanos en las entidades del orden nacional, éstas deben elaborar un documento donde se justifique la creación del respectivo trámite, y en el artículo 39 del Decreto 19 de 2012, el cual consagra el deber de las entidades públicas o de los particulares que ejercen

funciones administrativas, de someter a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, los trámites autorizados por la ley que pretendan establecer; el Ministerio de Transporte, somete a consideración del DAFP el texto del decreto que reglamenta el procedimiento administrativo especial de expropiación de bienes inmuebles para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, previsto en el artículo 83 de la Ley 1450 de 2011, al cual se refiere en idénticos términos la Ley 1474 de 2011, en el párrafo 1° del artículo 87. Para lo anterior se explican sus antecedentes, su estructura y técnica jurídica.

#### **I. Antecedentes**

El procedimiento de expropiación administrativa además de estar contemplado en el artículo 58 de la Constitución Política (C.P.), también se orienta por las disposiciones generales, aplicables a esta materia y debe observar las garantías fundamentales del debido proceso y las normas generales del procedimiento contempladas en el Decreto-ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo y en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Con el fin de justificar la implementación de este nuevo procedimiento administrativo especial, debe tenerse en cuenta que éste fue consagrado en las disposiciones mencionadas inicialmente para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, siguiendo el mandato constitucional establecido en el artículo 58 de la C.P., de acuerdo con el cual cuando existan motivos de utilidad pública o interés social previamente definidos por el legislador, podrá adelantarse la expropiación por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa", con el objeto de que las entidades del sector transporte cuenten con una herramienta ágil y eficiente que les permita adquirir los derechos reales de los inmuebles necesarios para adelantar proyectos de infraestructura de

transporte, ya que si bien actualmente existen mecanismos y procedimientos que permiten tal adquisición, lo cierto es que son dispendiosos y en ocasiones debido al cumplimiento de las condiciones necesarias para hacer uso de ellos, es necesario detener la ejecución de las obras, lo cual genera un impacto negativo en el sector transporte y representa mayores costos para las entidades responsables de los proyectos<sup>1</sup>.

En mérito de lo expuesto, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo especial de expropiación que se pretende reglamentar es distinto al que se encuentra previsto en la Ley 9 de 1989 y en la Ley 388 de 1998, es necesario que el poder ejecutivo de la administración pública reglamente este nuevo procedimiento con el fin de que las entidades del sector transporte cuenten con un mecanismo expedito que les permita adquirir el derecho de propiedad de aquellos inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, más aún si se tienen en cuenta que el Estado debe contar con la infraestructura necesaria para la entrada en vigencia de los distintos acuerdos y tratados de libre comercio que ha celebrado, como lo es el tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América.

En aras de justificar el procedimiento administrativo especial que se pone a consideración del DAFP previsto en la Ley 1450 de 2011 y 1474 de 2011, es preciso mencionar que tal procedimiento permitirá no sólo acabar con el tema de los peritazgos practicados en sede judicial que han ocasionado mayores costos a las entidades responsables de los proyectos, sino que la adquisición de los derechos reales sobre los inmuebles se podrá adelantar sin que medie sentencia judicial. Con la novedad de que las entidades, siempre que se trate de un proyecto

<sup>1</sup> El Estado colombiano es un Estado social de derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política (C.P.), en el cual se protege el derecho a la propiedad privada, sin embargo la C.P., prevé la posibilidad de recurrir a la expropiación por vía judicial o por vía administrativa cuando motivos de utilidad pública o interés social lo exijan siempre que haya una indemnización.

de infraestructura del sector transporte, podrán acudir a este nuevo procedimiento con el fin de llevar a cabo la expropiación por vía administrativa, sin tener que acreditar condiciones de urgencia las cuales deben ser declaradas por la instancia o autoridad competente, según lo determine el concejo municipal o distrital, o la junta metropolitana mediante acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 388 de 1998.

En mérito de lo expuesto y en virtud del principio de celeridad propio de las actuaciones administrativas, consagrado en el artículo 309 de la C.P., en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo y en el numeral 13 del artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se solicita al Departamento Administrativo de la Función Pública, emitir concepto favorable para la implementación de este nuevo procedimiento administrativo especial consagrado en las leyes 1450 y 1474 de 2011.

Lo anterior teniendo en cuenta que el legislador facultó al gobierno nacional para que en virtud de la potestad reglamentaria, regulará los aspectos técnicos y jurídicos necesarios para implementar el procedimiento administrativo especial de expropiación en materia de proyectos de infraestructura del sector transporte<sup>2</sup>.

## II. Estructura del decreto

El decreto se componen de nueve (9) artículos a través de los cuales se reglamenta el procedimiento administrativo especial de expropiación previsto en las leyes 1450 y 1474 de 2011.

<sup>2</sup> El legislador en el numeral 5 del artículo 83 de la Ley 1450 de 2011 y en el numeral 5 del párrafo 1º del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, facultó al gobierno nacional para reglamentar el trámite previsto en los artículos 83 de la Ley 1450 de 2011 y en el párrafo 1º del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011.





En el párrafo primero de ese artículo se consagra la posibilidad de celebrar contratos interadministrativos entre la entidad responsable del proyecto y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, o los concesionarios con el fin de cubrir los costos de los avalúos y de adelantar las demás actuaciones jurídicas y técnicas que se requieran.

El artículo 4 prevé la posibilidad de ajustar el área de influencia del proyecto, por parte de la entidad responsable de éste, cuando las circunstancias del proyecto lo ameriten.

Así mismo el párrafo de esta norma permite a la entidad responsable del proyecto revocar de manera directa el acto administrativo de declaratoria de utilidad pública o interés social de uno o varios inmuebles cuando se presenten situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o de interés general que impidan darle continuidad a un proyecto de infraestructura de transporte.

El artículo 5 consagra el procedimiento interno que deben llevar a cabo el IGAC o los catastros descentralizados para adelantar la fase de identificación de los predios que se vean afectados por el proyecto de infraestructura de transporte.

El artículo 6 establece los criterios que deben ser tenidos en cuenta por el IGAC o por los catastros descentralizados, al momento de establecer el precio de adquisición o precio indemnizatorio de los inmuebles que fueron declarados de utilidad pública o interés social y que fueron identificados por parte de esas mismas entidades.

Cabe señalar que el párrafo 1º de la norma en mención se señala que los procedimientos que se hubieren acordado con organismos multilaterales de crédito, se sujetaran a los mismos, salvo que las entidades de común acuerdo decidan acoger el procedimiento objeto de reglamentación.

REVISADO POR:  
FECHA: 2011/08/24  
E32

Por último establece el término de vigencia de los avalúos.

El artículo 7 en concordancia con el artículo 245 de la Ley 1450 de 2011, dispone el saneamiento automático de los vicios que existan en la titulación o tradición de los inmuebles declarados de utilidad pública o interés social, a favor de la entidad pública adquirente.

El artículo 8 establece en materia de peritazgos y avalúos, la sujeción de estos a la reglamentación que expida el gobierno nacional, así como a las normas metodológicas adoptadas por el IGAC. lo cual será aplicable no sólo para el procedimiento administrativo especial de expropiación para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, sino para los procesos de expropiación administrativa y judicial.

Por último el artículo 9 señala la vigencia del decreto reglamentario, el cual entrara a regir a partir de su publicación.

### III. Técnica Jurídica

#### 1. Análisis del régimen jurídico de la expropiación

La expropiación se encuentra regulada en el artículo 58 de la Constitución Política<sup>3</sup>, el cual, en el inciso primero, garantiza la propiedad privada y los demás

<sup>3</sup> C.P. Art. 58. "Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa -administrativa, incluso respecto del precio". (resaltado fuera de texto)

derechos adquiridos, lo cual imprime seguridad jurídica siempre y cuando la adquisición se hubiese efectuado con arreglo a las leyes civiles, que exigen para su reconocimiento un título justo y el cumplimiento de los presupuestos de existencia y validez de los actos jurídicos.

Igualmente, señala que la propiedad y los derechos adquiridos no pueden ser vulnerados o desconocidos por leyes posteriores, por lo tanto es en ésta norma en donde se consagra el principio de irretroactividad de la ley, en virtud del cual ésta no rige sino a partir de su vigencia para los hechos futuros; sin que sea viable aplicar la ley nueva a situaciones consolidadas bajo el imperio de leyes anteriores en el tiempo.

La Constitución Política de 1991 impone al ejercicio de la propiedad privada exigencias relativas a las funciones social y ecológica de la propiedad y, en cuanto a la terminación del derecho, prevé la posibilidad de recurrir a la expropiación por vía judicial y por vía administrativa cuando motivos de utilidad pública o interés social lo exijan siempre que haya una indemnización<sup>4</sup>.

Por expropiación se entiende la "desposesión que realiza el Estado de un derecho real de propiedad por motivo de utilidad pública a cambio de una indemnización"<sup>5</sup>.

La Corte Constitucional en sentencia de tutela T-284 de 1994 con ponencia del Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, definió la expropiación "[...] como un instituto, un negocio o una operación de derecho público por medio de la cual el Estado, por razones de utilidad pública o de interés social, priva coactivamente de la titularidad de un determinado bien a un particular, de acuerdo con un procedimiento específico y previo el pago de una indemnización."

<sup>4</sup> Jaime Arteaga Carvajal. "De los Bienes y su Dominio". Segunda Edición. Bogotá. Editorial Facultad de Derecho. 1999. Pág. 46.

<sup>5</sup> Ramiro Bejarano Guzmán. "Procesos Declarativos". Cuarta Edición. Bogotá. Temis S.A. 2008. Pág. 403.

El constituyente de 1991 inicialmente concibió cuatro clases de expropiación: la judicial, la administrativa, la expropiación sin indemnización por motivos de equidad, (consagrada en los incisos 4° y 5° del artículo 58 y suprimida por el Acto Legislativo 1 de 1999), y la expropiación aplicable en caso de guerra, cuya indemnización puede no ser previa (a la que hace referencia el artículo 59 de la C.P.).

De acuerdo con lo anterior, la expropiación se traduce en una de las manifestaciones de las formas de acción o actividad de la administración pública, denominada tradicionalmente por la doctrina como "actividad de policía o de limitación a la libertad", la cual recoge el conjunto de medidas coactivas utilizadas por la administración para que el asociado dirija su actuación dentro de los senderos que garanticen el interés general, razón por la cual se señalan como fenómenos típicos de esta actividad los de limitación de derechos y libertades, ejercicio de la fuerza y coacción, todas ellas justificadas bajo el principio de legalidad dentro de un Estado Social de Derecho y con el único propósito de ofrecer soluciones efectivas a la comunidad<sup>6</sup>. Dentro de sus principales formas de manifestación se destacan: el sacrificio de situaciones de mero interés, limitaciones administrativas de derechos, transferencias coactivas no expropiatorias, comisos, prestaciones forzosas, imposición de deberes u órdenes, delimitación administrativa de derechos privados, eliminación de titularidades privadas, nacionalizaciones, extinción del dominio, medidas de orden público, limitaciones sanitarias, restricciones por razones ambientales, configuración por la administración del contenido de derechos privados<sup>7</sup>, y por supuesto la expropiación en cualquiera de sus modalidades.

<sup>6</sup> Jaime Orlando Santofimio Gamboa. "Tratado de Derecho Administrativo". T. I. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2003. Pág(s). 40 - 41.

<sup>7</sup> Ibidem.

Para que la administración pública pueda hacer uso de la expropiación se deben reunir los siguientes requisitos:

1. Que una ley defina los motivos de utilidad pública o de interés social. La Ley se limita a determinar: el sujeto expropiante y los límites de su competencia, los sujetos pasivos de la expropiación, la definición de los motivos de utilidad pública e interés social que justifican la expropiación, la regulación del monto de la indemnización y la forma de pago, así como el procedimiento administrativo y judicial que debe surtir para adelantar la expropiación.
2. Indemnización previa. Su monto será establecido por los peritos designados para el efecto, de acuerdo con las normas que reglamentan la forma de determinarlo. Se entiende como previa la definición y el reconocimiento del derecho del propietario con anterioridad a la expropiación, de tal manera que por una parte no se configure una expropiación arbitraria, y por otra, el propietario pueda contar desde entonces con bienes y valores enajenables y ciertos equivalentes al valor del bien expropiado<sup>8</sup>.
3. La observancia del procedimiento establecido para determinar el objeto de la operación expropiatoria y, a través de él, tanto del daño producido por ésta, como del cálculo de la indemnización, que ha de ser la que corresponda de acuerdo con las características de los bienes afectados.

La diferencia entre la expropiación judicial y la administrativa radica en que la primera debe cumplir con otro requisito adicional y es la sentencia judicial, la cual constituye el título de adquisición del bien objeto de expropiación cuando no fue posible la negociación voluntaria, mientras que en la segunda el título de adquisición es el acto administrativo mediante el cual se ordena la expropiación.

De conformidad con lo anterior, se puede concluir que la expropiación administrativa es un instrumento más ágil y más efectivo para lograr la incorporación de un bien al patrimonio estatal, mediante un trámite público, breve,

<sup>8</sup> Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2001. Pág. 113.  
Informe de Labores  
Ministerio de Transporte

previa indemnización económica, siempre y cuando responda a los motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador; requisito que al igual que en la expropiación judicial es de cumplimiento obligatorio, mediante una ley que los determine, norma que además señalará los casos en los que procede la expropiación administrativa, la entidad competente, el procedimiento y los criterios para calcular la indemnización y los mecanismos de defensa<sup>9</sup>.

Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad que tienen los particulares que se ven afectados con la expropiación, de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de cuestionar la legalidad de la actuación adelantada por la administración, lo cual encuentra sustento en el inciso 4 del artículo 58 de la C.P.

Por último vale la pena traer a colación algunas de las consideraciones expuestas por el profesor Luciano Parejo Alfonso, en relación con la expropiación en España, en su obra "Lecciones de Derecho de Administrativo", con el fin de apreciar la similitud que existe en los dos regímenes jurídicos, en la concepción de este instrumento; *"La AP (administración pública) realiza actividades que inciden de modo diverso en los bienes y derechos de los sujetos privados. Desde el punto de vista del Estado de Derecho y, por tanto, de la seguridad y protección jurídicas (sic) de dichos bienes y derechos, la acción relevante es la que produce un incidencia negativa en aquellos bienes y derechos, tanto la directa que implique su privación en cualquier forma, como la que tenga como resultado objetivo, aún no pretendido, una lesión de los mismos. [...] Por tanto, a la necesidad de indemnización se añaden, a partir de entonces y en todas las Constituciones del S. XIX, también entre nosotros y empezando por la Cádiz de 1812, los siguientes requisitos: a) la expropiación debe responder necesariamente a una causa de necesidad pública (no sólo a un deseo del monarca o la mera voluntad del poder*

<sup>9</sup> *Ibidem*. Pág. 115.  
Informe de Labores  
Ministerio de Transporte

*público); b) la necesidad pública ha de ser declarada por el órgano legislativo; c) la indemnización ha de ser abonada con anterioridad a la apropiación pública del bien; y d) la indemnización ha de ser justa, es decir, valorada en términos que permitan el reemplazo del bien expropiado."*<sup>10</sup>.

## 2. Leyes aplicables

La expropiación encuentra un primer antecedente en el Decreto-ley 222 de 1983, el cual consagra en su artículo 110 la posibilidad que tiene las entidades públicas de adquirir total o parcialmente los inmuebles correspondientes para la ejecución de contratos de obra pública, teniendo en cuenta que esta norma remite a lo dispuesto en el Capítulo 3 el cual en el artículo 108 hace una remisión directa al artículo 81 hoy derogado, que trataba sobre el objeto del contrato de obra pública. Por otra parte, la expropiación administrativa y judicial, se encuentran reguladas en los artículos 9 a 17, 20 a 38 y 53, de la Ley 9 de 1989, y en los artículos 58 a 72 de la Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

En relación con la facultad de la administración pública de adelantar expropiaciones para ejecutar proyectos de infraestructura de transporte, antes de la expedición de la Ley 388 de 1997, la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones, fue el primer estatuto que consagró en el contexto legislativo la expropiación por vía administrativa, toda vez

<sup>10</sup> Luciano Parejo Alfonso. "Lecciones de Derecho Administrativo". Universidad Externado de Colombia. 2011. Pág(s). 706 – 707.  
Informe de Labores  
Ministerio de Transporte

que la expropiación consagrada en la Ley 9 de 1989 es de carácter judicial. Sin embargo, no señaló el procedimiento para hacer uso de tal mecanismo<sup>11</sup>.

El artículo 35 de la disposición en mención consagró la expropiación administrativa en los siguientes términos: "El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, los Departamentos a través del Gobernador y los Municipios a través de los Alcaldes, podrán decretar la expropiación administrativa con indemnización, para la adquisición de predios destinados a obras de infraestructura de transporte. Para el efecto deberán ceñirse a los requisitos señalados en las normas que regulen la materia."

No obstante el vacío legal que existía en cuanto al procedimiento para adelantar la expropiación administrativa en obras de infraestructura de transporte, fue superado con la expedición de la Ley 388 de 1997, la cual en su artículo 72 dispuso: "El trámite para la aplicación de la expropiación por vía administrativa previsto en este capítulo se aplicará a los demás casos en que las leyes la hayan autorizado, siempre y cuando expresamente no se hubiere definido otro procedimiento."<sup>12</sup>

Por último el artículo 83 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, crea el procedimiento administrativo especial

<sup>11</sup> El Consejo de Estado, mediante concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil, del 2 de septiembre de 1996, con ponencia del Dr. Roberto Suárez Franco, Rad. AC-168, señaló: "En la actualidad no existe un procedimiento general aplicable a la expropiación por vía administrativa. Las normas del Código Contencioso Administrativo que reglamentan las actuaciones administrativas no son aplicables para adelantar dicho procedimiento, por cuanto no contienen reglas para tramitar asuntos tales como la oferta de compra, el monto de la indemnización y su forma de pago, indispensable para llevar a término toda expropiación." Ante la ausencia de un procedimiento aplicable no es posible ejecutar la provisión contenida en el artículo 35 de la Ley 105 de 1993 porque las normas sobre procedimiento no se pueden establecer por vía analógica o deducción."

Jaime Orlando Santofimio, "Derecho Urbanístico", Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004. Pág. 551.

<sup>12</sup> Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2001. Pág. 120.



de expropiación para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte aplicable a nivel nacional y territorial.

Norma que a su vez fue reproducida en idénticos términos por el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

**3. Articulación con el Código Contencioso Administrativo, Decreto-ley 01 de 1984 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011**

El procedimiento administrativo de expropiación, además de estar contemplado en el artículo 58 de la Constitución Política, también se orienta por las disposiciones generales, aplicables a esta materia y deben observar las garantías fundamentales del debido proceso y las normas generales del procedimiento contempladas en el Código Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a las cuales se remite el decreto reglamentario. Esto quiere decir que la entidades del sector transporte que hagan uso del procedimiento administrativo especial de expropiación consagrado en la Ley 1450 de 2011 y 1474 de 2011, deberán aplicar las normas del Código Contencioso Administrativo hasta tanto entre en vigencia el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir hasta el 2 de julio de 2012<sup>13</sup>.

Ahora bien, la aplicación de las disposiciones del Código Contencioso Administrativo o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al momento de entrar en vigencia, está sujeta a la existencia de

<sup>13</sup> Ley 1437 de 2011, Art. 308. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

vacíos legales en las disposiciones generales señaladas en el artículo 1 del proyecto de decreto reglamentario, por ejemplo, la notificación, comunicación o publicación de los distintos actos administrativos expedidos por la administración, la interposición de recursos en contra de éstos con el fin de agotar la vía gubernativa, entre otros aspectos que se sujetaran a las disposiciones contenidas en los Códigos antes mencionados.

#### **4. La regulación del tema de los avalúos en el marco del Código Civil**

En cuanto a los avalúos que debe practicar el IGAC, con el fin de establecer el precio de adquisición o indemnizatorio de los inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, es necesario señalar que se encuentran sujetos no sólo a lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley 1450 de 2011, sino a las disposiciones del Código Civil, C.C., que regulan el tema del lucro cesante y el daño emergente, modalidades del perjuicio material que en todo caso deben haber sido alegados y probados por los propietarios o terceros debidamente acreditados en el procedimiento administrativo especial de expropiación.

De acuerdo con el artículo 1613 del C.C., "La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente", y con el artículo 1614 el cual señala: "Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento"; el lucro cesante y el

daño emergentes con criterios que permiten establecer el perjuicio material causado a una persona por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de otra. Igualmente son criterios que el IGAC debe tener en cuenta al momento de establecer el precio de adquisición o indemnizatorio de los inmuebles, por tal razón tanto el lucro cesante como el daño emergente se encuentran dentro de los criterios para determinar el valor del precio consagrados en el artículo 6 del proyecto de decreto reglamentario, teniendo en cuenta que si bien es cierto las disposiciones del Código Civil antes mencionadas hacen referencia a la responsabilidad contractual, también lo es que en nuestro ordenamiento jurídico, tales modalidades del perjuicio material son aplicables en los casos de responsabilidad extracontractual<sup>14</sup>.

#### **5. Aplicación de la Ley 80 de 1993, y en general de las normas que conforman el Estatuto General de Contratación Pública en Colombia**

El Estatuto General de Contratación Pública, compuesto por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que hoy modifican sustancialmente la Ley 1474 de 2011 y el Decreto-ley 19 de 2012, y que reglamenta el Decreto 734 de 2012<sup>15</sup>, es aplicable a los proyectos de infraestructura en los cuales se haga uso del procedimiento administrativo especial de expropiación que se pretende reglamentar, salvo las excepciones consagradas en la ley y en el reglamento.

Lo anterior encuentra sustento en lo siguiente: el procedimiento administrativo en mención fue consagrado básicamente en dos normas, entre ellas en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, el cual modifica el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, disposición que establece el deber de las entidades del estado previo a la celebración de un contrato estatal, de contar con los estudios, diseños,

<sup>14</sup> Juan Carlos Henao. "El Daño". Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2007. Pág. 197.

<sup>15</sup> Iván Darío Gómez Lec. "El Derecho de la Contratación Pública en Colombia". Bogotá. Ed. Legis S.A. 2012. Pág. 2.

proyectos y pliegos de condiciones necesarios, cuando el contrato implique la realización de una obra. Se trata entonces de una ratificación del principio de planeación contractual, el cual se encuentra regulado en el artículo 2.1.1., del Decreto 734 de 2012, que entre otras cosas, en el parágrafo 4 dispone que en los eventos en que el objeto de la contratación involucre diseño y construcción, la entidad deberá poner a disposición de los oferentes además de los elementos mínimos a los que hace referencia ese artículo, todos los documentos técnicos disponibles para el desarrollo del proyecto. Lo cual resulta claramente aplicable a los proyectos de infraestructura de transporte que pretendan ejecutar las entidades del sector transporte.

En concordancia con lo anterior, el parágrafo 3 del artículo 2 del proyecto de decreto reglamentario, establece que las entidades contratantes, cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en forma previa a la apertura del proceso de selección o a la firma del contrato, deberán contar los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental.

Lo anterior quiere decir que en los procesos contractuales en que se pretenda hacer uso del procedimiento administrativo especial que se pretende reglamentar, deben observarse las normas del Estatuto General de Contratación Pública, y en aquellos eventos en que no sean aplicables deberán igualmente observarse los principios de la función pública, del control fiscal y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Cordialmente,

**GERMÁN CARDONA GUTIÉRREZ**

Ministro de Transporte

Informe de Labores  
Ministerio de Transporte

Anexo: En medio magnético, estudio sobre la expropiación en el ordenamiento jurídico colombiano, y el texto del proyecto de decreto reglamentario de las algunas de las disposiciones contenidas en las leyes 1450 y 1474 de 2011.

### **3. OFICIO DIRIGIDO A LA SECRETARÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Bogotá D.C., mayo de 2012

Doctora

**CRISTINA PARDO SCHLESINGER**

Secretaría Jurídica

Presidencia de la República

Ciudad

**Asunto:** Decreto reglamentario en materia de expropiación de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.

Respetada doctora Cristina:

Para su respectivo trámite ante la Presidencia de la República, pongo a consideración el texto del decreto que reglamenta el procedimiento administrativo especial de expropiación de bienes inmuebles para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, previsto en el artículo 83 de la Ley 1450 de 2011, al cual se refiere en idénticos términos la Ley 1474 de 2011, en el parágrafo 1° del

artículo 87. Para lo anterior se explican sus antecedentes, su estructura y técnica jurídica.

## **I. Antecedentes**

El procedimiento de expropiación administrativa además de estar contemplado en el artículo 58 de la Constitución Política (C.P.), también se orienta por las disposiciones generales, aplicables a esta materia y debe observar las garantías fundamentales del debido proceso y las normas generales del procedimiento contempladas en el Decreto-ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo y en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este nuevo procedimiento administrativo especial, fue consagrado en las disposiciones mencionadas inicialmente para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, siguiendo el mandato constitucional establecido en el artículo 58 de la C.P., de acuerdo con el cual cuando existan motivos de utilidad pública o interés social previamente definidos por el legislador, podrá adelantarse la expropiación por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa", con el objeto de que las entidades del sector transporte cuenten con una herramienta ágil y eficiente que les permita adquirir los derechos reales de los inmuebles necesarios para adelantar proyectos de infraestructura de transporte, ya que si bien actualmente existen mecanismos y procedimientos que permiten tal adquisición, lo cierto es que son dispendiosos y en ocasiones debido al cumplimiento de las condiciones necesarias para hacer uso de ellos, es necesario detener la ejecución de las obras, lo cual genera un impacto negativo en

245

el sector transporte y representa mayores costos para las entidades responsables de los proyectos<sup>16</sup>.

En mérito de lo expuesto, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo especial de expropiación que se pretende reglamentar es distinto al que se encuentra previsto en la Ley 9 de 1989 y en la Ley 388 de 1998, es necesario que el poder ejecutivo de la administración pública reglamente este nuevo procedimiento con el fin de que las entidades del sector transporte cuenten con un mecanismo expedito que les permita adquirir el derecho de propiedad de aquellos inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, más aún si se tienen en cuenta que el Estado debe contar con la infraestructura necesaria para la entrada en vigencia de los distintos acuerdos y tratados de libre comercio que ha celebrado, como lo es el tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América.

Adicionalmente, este procedimiento permitirá no sólo acabar con el tema de los peritazgos practicados en sede judicial que han ocasionado mayores costos a las entidades responsables de los proyectos, sino que la adquisición de los derechos reales sobre los inmuebles se podrá adelantar sin que medie sentencia judicial. Con la novedad de que las entidades, siempre que se trate de un proyecto de infraestructura del sector transporte, podrán acudir a este nuevo procedimiento con el fin de llevar a cabo la expropiación por vía administrativa, sin tener que acreditar condiciones de urgencia las cuales deben ser declaradas por la instancia o autoridad competente, según lo determine el concejo municipal o distrital, o la junta metropolitana mediante acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 388 de 1998.

<sup>16</sup> El Estado colombiano es un Estado social de derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política (C.P.), en el cual se protege el derecho a la propiedad privada, sin embargo la C.P., prevé la posibilidad de recurrir a la expropiación por vía judicial o por vía administrativa cuando motivos de utilidad pública o interés social lo exijan siempre que haya una indemnización.

En mérito de lo expuesto y en virtud del principio de celeridad propio de las actuaciones administrativas, consagrado en el artículo 309 de la C.P., en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo y en el numeral 13 del artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se pone a consideración de la Presidencia de la República el presente reglamento, para su respectivo trámite.

Lo anterior teniendo en cuenta que el legislador facultó al gobierno nacional para que en virtud de la potestad reglamentaria, regulará los aspectos técnicos y jurídicos necesarios para implementar el procedimiento administrativo especial de expropiación en materia de proyectos de infraestructura del sector transporte<sup>17</sup>.

## **II. Estructura del decreto**

El decreto se componen de nueve (9) artículos a través de los cuales se reglamenta el procedimiento administrativo especial de expropiación previsto en las leyes 1450 y 1474 de 2011.

El artículo 1 consagra los procedimientos legales de expropiación que pueden ser utilizados por las entidades del sector transporte para ejecutar proyectos de infraestructura de transporte y las fuentes normativas aplicables, es decir, las disposiciones aplicables para adelantar tales expropiaciones.

Vale la pena resaltar, que virtud de esta norma es posible acudir a lo dispuesto en la Ley 9 de 1989, en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto-ley 222 de 1983, en lo que a expropiación administrativa se refiere, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo Decreto-Ley 01

<sup>17</sup> El legislador en el numeral 5 del artículo 83 de la Ley 1450 de 2011 y en el numeral 5 del párrafo 1º del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, facultó al gobierno nacional para reglamentar el trámite previsto en los artículos 83 de la Ley 1450 de 2011 y en el párrafo 1º del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011.



de 1984 y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, en lo que no regulen las normas antes mencionadas.

Por último, en relación con los avalúos, este artículo dispone que este aspecto se encuentra sometido en su integridad a las disposiciones de la Ley 1450, en especial a lo dispuesto en el artículo 246 de esa ley, lo cual se traduce en una ratificación del contenido normativo del mencionado artículo.

En el artículo 2 se encuentran las etapas del procedimiento administrativo especial de expropiación, con el fin de dar claridad al momento de aplicarlo, teniendo en cuenta el carácter general de las normas que lo crearon, es decir que establece los uno a uno los pasos que deben seguir las entidades que hagan uso de tal mecanismo.

El artículo 3 señala el contenido mínimo de la resolución de coordenadas del proyecto que debe elaborar la entidad responsable del mismo, la cual entre otras cosas es el acto administrativo a través del cual se hace la declaratoria de utilidad pública de los inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, tal y como lo señala la misma norma.

En el párrafo primero de ese artículo se consagra la posibilidad de celebrar contratos interadministrativos entre la entidad responsable del proyecto y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, o los concesionarios con el fin de cubrir los costos de los avalúos y de adelantar las demás actuaciones jurídicas y técnicas que se requieran.

El artículo 4 prevé la posibilidad de ajustar el área de influencia del proyecto, por parte de la entidad responsable de éste, cuando las circunstancias del proyecto lo ameriten.

Así mismo el párrafo de esta norma permite a la entidad responsable del proyecto revocar de manera directa el acto administrativo de declaratoria de utilidad pública o interés social de uno o varios inmuebles cuando se presenten situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o de interés general que impidan darle continuidad a un proyecto de infraestructura de transporte.

El artículo 5 consagra el procedimiento interno que deben llevar a cabo el IGAC o los catastros descentralizados para adelantar la fase de identificación de los predios que se vean afectados por el proyecto de infraestructura de transporte.

El artículo 6 establece los criterios que deben ser tenidos en cuenta por el IGAC o por los catastros descentralizados, al momento de establecer el precio de adquisición o precio indemnizatorio de los inmuebles que fueron declarados de utilidad pública o interés social y que fueron identificados por parte de esas mismas entidades.

Cabe señalar que el párrafo 1º de la norma en mención se señala que los procedimientos que se hubieren acordado con organismos multilaterales de crédito, se sujetaran a los mismos, salvo que las entidades de común acuerdo decidan acoger el procedimiento objeto de reglamentación.

Por último establece el término de vigencia de los avalúos.

El artículo 7 en concordancia con el artículo 245 de la Ley 1450 de 2011, dispone el saneamiento automático de los vicios que existan en la titulación o tradición de los inmuebles declarados de utilidad pública o interés social, a favor de la entidad pública adquirente.

El artículo 8 establece en materia de peritazgos y avalúos, la sujeción de estos a la reglamentación que expida el gobierno nacional, así como a las normas metodológicas adoptadas por el IGAC, lo cual será aplicable no sólo para el

procedimiento administrativo especial de expropiación para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, sino para los procesos de expropiación administrativa y judicial.

Por último el artículo 9 señala la vigencia del decreto reglamentario, el cual entrara a regir a partir de su publicación.

### III. Técnica Jurídica

#### 1. Análisis del régimen jurídico de la expropiación

La expropiación se encuentra regulada en el artículo 58 de la Constitución Política<sup>18</sup>, el cual, en el inciso primero, garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos, lo cual imprime seguridad jurídica siempre y cuando la adquisición se hubiese efectuado con arreglo a las leyes civiles, que exigen para su reconocimiento un título justo y el cumplimiento de los presupuestos de existencia y validez de los actos jurídicos.

Igualmente, señala que la propiedad y los derechos adquiridos no pueden ser vulnerados o desconocidos por leyes posteriores, por lo tanto es en ésta norma en donde se consagra el principio de irretroactividad de la ley, en virtud del cual ésta no rige sino a partir de su vigencia para los hechos futuros; sin que sea viable

<sup>18</sup> C.P. Art. 58. "Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa -administrativa, incluso respecto del precio". (resaltado fuera de texto)

aplicar la ley nueva a situaciones consolidadas bajo el imperio de leyes anteriores en el tiempo.

La Constitución Política de 1991 impone al ejercicio de la propiedad privada exigencias relativas a las funciones social y ecológica de la propiedad y, en cuanto a la terminación del derecho, prevé la posibilidad de recurrir a la expropiación por vía judicial y por vía administrativa cuando motivos de utilidad pública o interés social lo exijan siempre que haya una indemnización<sup>19</sup>.

Por expropiación se entiende la "desposesión que realiza el Estado de un derecho real de propiedad por motivo de utilidad pública a cambio de una indemnización"<sup>20</sup>.

La Corte Constitucional en sentencia de tutela T-284 de 1994 con ponencia del Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, definió la expropiación "[...] como un instituto, un negocio o una operación de derecho público por medio de la cual el Estado, por razones de utilidad pública o de interés social, priva coactivamente de la titularidad de un determinado bien a un particular, de acuerdo con un procedimiento específico y previo el pago de una indemnización."

El constituyente de 1991 inicialmente concibió cuatro clases de expropiación: la judicial, la administrativa, la expropiación sin indemnización por motivos de equidad, (consagrada en los incisos 4° y 5° del artículo 58 y suprimida por el Acto Legislativo 1 de 1999), y la expropiación aplicable en caso de guerra, cuya indemnización puede no ser previa (a la que hace referencia el artículo 59 de la C.P.).

<sup>19</sup> Jaime Artcaga Carvajal. "De los Bienes y su Dominio". Segunda Edición. Bogotá. Editorial Facultad de Derecho. 1999. Pág. 46.

<sup>20</sup> Ramiro Eejarano Guzmán. "Procesos Declarativos". Cuarta Edición. Bogotá. Temis S.A. 2008. Pág. 403.

De acuerdo con lo anterior, la expropiación se traduce en una de las manifestaciones de las formas de acción o actividad de la administración pública, denominada tradicionalmente por la doctrina como “actividad de policía o de limitación a la libertad”, la cual recoge el conjunto de medidas coactivas utilizadas por la administración para que el asociado dirija su actuación dentro de los senderos que garanticen el interés general, razón por la cual se señalan como fenómenos típicos de esta actividad los de limitación de derechos y libertades, ejercicio de la fuerza y coacción, todas ellas justificadas bajo el principio de legalidad dentro de un Estado Social de Derecho y con el único propósito de ofrecer soluciones efectivas a la comunidad<sup>21</sup>. Dentro de sus principales formas de manifestación se destacan: el sacrificio de situaciones de mero interés, limitaciones administrativas de derechos, transferencias coactivas no expropiatorias, comisos, prestaciones forzosas, imposición de deberes u órdenes, delimitación administrativa de derechos privados, eliminación de titularidades privadas, nacionalizaciones, extinción del dominio, medidas de orden público, limitaciones sanitarias, restricciones por razones ambientales, configuración por la administración del contenido de derechos privados<sup>22</sup>, y por supuesto la expropiación en cualquiera de sus modalidades.

Para que la administración pública pueda hacer uso de la expropiación se deben reunir los siguientes requisitos:

1. Que una ley defina los motivos de utilidad pública o de interés social. La Ley se limita a determinar: el sujeto expropiante y los límites de su competencia, los sujetos pasivos de la expropiación, la definición de los motivos de utilidad pública e interés social que justifican la expropiación, la regulación del monto de la indemnización y la forma de pago, así como el

<sup>21</sup> Jaime Orlando Santofimio Gamboa. “Tratado de Derecho Administrativo”. T. I. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2003. Pág(s). 40 - 41.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

procedimiento administrativo y judicial que debe surtir para adelantar la expropiación.

2. Indemnización previa. Su monto será establecido por los peritos designados para el efecto, de acuerdo con las normas que reglamentan la forma de determinarlo. Se entiende como previa la definición y el reconocimiento del derecho del propietario con anterioridad a la expropiación, de tal manera que por una parte no se configure una expropiación arbitraria, y por otra, el propietario pueda contar desde entonces con bienes y valores enajenables y ciertos equivalentes al valor del bien expropiado<sup>23</sup>.
3. La observancia del procedimiento establecido para determinar el objeto de la operación expropiatoria y, a través de él, tanto del daño producido por ésta, como del cálculo de la indemnización, que ha de ser la que corresponda de acuerdo con las características de los bienes afectados.

La diferencia entre la expropiación judicial y la administrativa radica en que la primera debe cumplir con otro requisito adicional y es la sentencia judicial, la cual constituye el título de adquisición del bien objeto de expropiación cuando no fue posible la negociación voluntaria, mientras que en la segunda el título de adquisición es el acto administrativo mediante el cual se ordena la expropiación.

De conformidad con lo anterior, se puede concluir que la expropiación administrativa es un instrumento más ágil y más efectivo para lograr la incorporación de un bien al patrimonio estatal, mediante un trámite público, breve, previa indemnización económica, siempre y cuando responda a los motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador; requisito que al igual que en la expropiación judicial es de cumplimiento obligatorio, mediante una ley que los determine, norma que además señalará los casos en los que procede la

<sup>23</sup> Prácticas Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2001. Pág. 113.

expropiación administrativa, la entidad competente, el procedimiento y los criterios para calcular la indemnización y los mecanismos de defensa<sup>24</sup>.

Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad que tienen los particulares que se ven afectados con la expropiación, de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de cuestionar la legalidad de la actuación adelantada por la administración, lo cual encuentra sustento en el inciso 4 del artículo 58 de la C.P.

Por último vale la pena traer a colación algunas de las consideraciones expuestas por el profesor Luciano Parejo Alfonso, en relación con la expropiación en España, en su obra "Lecciones de Derecho de Administrativo", con el fin de apreciar la similitud que existe en los dos regímenes jurídicos, en la concepción de este instrumento; *"La AP (administración pública) realiza actividades que inciden de modo diverso en los bienes y derechos de los sujetos privados. Desde el punto de vista del Estado de Derecho y, por tanto, de la seguridad y protección jurídicas (sic) de dichos bienes y derechos, la acción relevante es la que produce un incidencia negativa en aquellos bienes y derechos, tanto la directa que implique su privación en cualquier forma, como la que tenga como resultado objetivo, aún no pretendido, una lesión de los mismos. [...] Por tanto, a la necesidad de indemnización se añaden, a partir de entonces y en todas las Constituciones del S. XIX, también entre nosotros y empezando por la Cádiz de 1812, los siguientes requisitos: a) la expropiación debe responder necesariamente a una causa de necesidad pública (no sólo a un deseo del monarca o la mera voluntad del poder público); b) la necesidad pública ha de ser declarada por el órgano legislativo; c) la indemnización ha de ser abonada con anterioridad a la apropiación pública del*

<sup>24</sup> Ibidem. Pág. 115.  
Informe de Labores  
Ministerio de Transporte

bien; y d) la indemnización ha de ser justa, es decir, valorada en términos que permitan el reemplazo del bien expropiado.”<sup>25</sup>

## 2. Leyes aplicables

La expropiación encuentra un primer antecedente en el Decreto-ley 222 de 1983, el cual consagra en su artículo 110 la posibilidad que tiene las entidades públicas de adquirir total o parcialmente los inmuebles correspondientes para la ejecución de contratos de obra pública, teniendo en cuenta que esta norma remite a lo dispuesto en el Capítulo 3 el cual en el artículo 108 hace una remisión directa al artículo 81 hoy derogado, que trataba sobre el objeto del contrato de obra pública. Por otra parte, la expropiación administrativa y judicial, se encuentran reguladas en los artículos 9 a 17, 20 a 38 y 53, de la Ley 9 de 1989, y en los artículos 58 a 72 de la Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

En relación con la facultad de la administración pública de adelantar expropiaciones para ejecutar proyectos de infraestructura de transporte, antes de la expedición de la Ley 388 de 1997, la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones, fue el primer estatuto que consagró en el contexto legislativo la expropiación por vía administrativa, toda vez que la expropiación consagrada en la Ley 9 de 1989 es de carácter judicial. Sin embargo, no señaló el procedimiento para hacer uso de tal mecanismo<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Luciano Parejo Alfonso. “Lecciones de Derecho Administrativo”. Universidad Externado de Colombia. 2011. Pág(s). 706 -- 707.

<sup>26</sup> El Consejo de Estado, mediante concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil, del 2 de septiembre de 1996, con ponencia del Dr. Roberto Suárez Franco, Rad. AC-168, señaló: “En la actualidad no existe un procedimiento general aplicable a la expropiación por vía administrativa. Las normas del Código Contencioso Administrativo que reglamentan las actuaciones administrativas no son aplicables para adelantar dicho procedimiento, por cuanto no contienen reglas para tramitar asuntos tales como la oferta de compra, el

Informe de Labores  
Ministerio de Transporte

Página No. 41 de 46



El artículo 35 de la disposición en mención consagró la expropiación administrativa en los siguientes términos: “El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, los Departamentos a través del Gobernador y los Municipios a través de los Alcaldes, podrán decretar la expropiación administrativa con indemnización, para la adquisición de predios destinados a obras de infraestructura de transporte. Para el efecto deberán ceñirse a los requisitos señalados en las normas que regulen la materia.”

No obstante el vacío legal que existía en cuanto al procedimiento para adelantar la expropiación administrativa en obras de infraestructura de transporte, fue superado con la expedición de la Ley 388 de 1997, la cual en su artículo 72 dispuso: “El trámite para la aplicación de la expropiación por vía administrativa previsto en este capítulo se aplicará a los demás casos en que las leyes la hayan autorizado, siempre y cuando expresamente no se hubiere definido otro procedimiento.”<sup>27</sup>

Por último el artículo 83 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, creo el procedimiento administrativo especial de expropiación para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte aplicable a nivel nacional y territorial.

Norma que a su vez fue reproducida en idénticos términos por el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

---

monto de la indemnización y su forma de pago, indispensable para llevar a término toda expropiación.” Ante la ausencia de un procedimiento aplicable no es posible ejecutar la provisión contenida en el artículo 35 de la Ley 105 de 1993 porque las normas sobre procedimiento no se pueden establecer por vía analógica o deducción.”

Jaime Orlando Santofimio. “Derecho Urbanístico”. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2004. Pág. 531.

<sup>27</sup> Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2001. Pág. 120.

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
Informe de Labores  
256

### **3. Articulación con el Código Contencioso Administrativo, Decreto-ley 01 de 1984 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011**

El procedimiento administrativo de expropiación, además de estar contemplado en el artículo 58 de la Constitución Política, también se orienta por las disposiciones generales, aplicables a esta materia y deben observar las garantías fundamentales del debido proceso y las normas generales del procedimiento contempladas en el Código Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a las cuales se remite el decreto reglamentario. Esto quiere decir que la entidades del sector transporte que hagan uso del procedimiento administrativo especial de expropiación consagrado en la Ley 1450 de 2011 y 1474 de 2011, deberán aplicar las normas del Código Contencioso Administrativo hasta tanto entre en vigencia el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir hasta el 2 de julio de 2012<sup>28</sup>.

Ahora bien, la aplicación de las disposiciones del Código Contencioso Administrativo o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al momento de entrar en vigencia, está sujeta a la existencia de vacíos legales en las disposiciones generales señaladas en el artículo 1 del proyecto de decreto reglamentario, por ejemplo, la notificación, comunicación o publicación de los distintos actos administrativos expedidos por la administración, la interposición de recursos en contra de éstos con el fin de agotar la vía gubernativa, entre otros aspectos que se sujetaran a las disposiciones contenidas en los Códigos antes mencionados.

<sup>28</sup> Ley 1437 de 2011. Art. 308. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

257

#### **4. La regulación del tema de los avalúos en el marco del Código Civil**

En cuanto a los avalúos que debe practicar el IGAC, con el fin de establecer el precio de adquisición o indemnizatorio de los inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, es necesario señalar que se encuentran sujetos no sólo a lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley 1450 de 2011, sino a las disposiciones del Código Civil, C.C., que regulan el tema del lucro cesante y el daño emergente, modalidades del perjuicio material que en todo caso deben haber sido alegados y probados por los propietarios o terceros debidamente acreditados en el procedimiento administrativo especial de expropiación.

De acuerdo con el artículo 1613 del C.C., "La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente", y con el artículo 1614 el cual señala: "Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento"; el lucro cesante y el daño emergentes con criterios que permiten establecer el perjuicio material causado a una persona por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de otra. Igualmente son criterios que el IGAC debe tener en cuenta al momento de establecer el precio de adquisición o indemnizatorio de los inmuebles, por tal razón tanto el lucro cesante como el daño emergente se encuentran dentro de los criterios para determinar el valor del precio consagrados en el artículo 6 del proyecto de decreto reglamentario, teniendo en cuenta que si bien es cierto las disposiciones del Código Civil antes mencionadas hacen referencia a la

responsabilidad contractual, también lo es que en nuestro ordenamiento jurídico, tales modalidades del perjuicio material son aplicables en los casos de responsabilidad extracontractual<sup>29</sup>.

#### **5. Aplicación de la Ley 80 de 1993, y en general de las normas que conforman el Estatuto General de Contratación Pública en Colombia**

El Estatuto General de Contratación Pública, compuesto por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que hoy modifican sustancialmente la Ley 1474 de 2011 y el Decreto-ley 19 de 2012, y que reglamenta el Decreto 734 de 2012<sup>30</sup>, es aplicable a los proyectos de infraestructura en los cuales se haga uso del procedimiento administrativo especial de expropiación que se pretende reglamentar, salvo las excepciones consagradas en la ley y en el reglamento.

Lo anterior encuentra sustento en lo siguiente: el procedimiento administrativo en mención fue consagrado básicamente en dos normas, entre ellas en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, el cual modifica el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, disposición que establece el deber de las entidades del estado previo a la celebración de un contrato estatal, de contar con los estudios, diseños, proyectos y pliegos de condiciones necesarios, cuando el contrato implique la realización de un obra. Se trata entonces de una ratificación del principio de planeación contractual, el cual se encuentra regulado en el artículo 2.1.1., del Decreto 734 de 2012, que entre otras cosas, en el parágrafo 4 dispone que en los eventos en que el objeto de la contratación involucre diseño y construcción, la entidad deberá poner a disposición de los oferentes además de los elementos mínimos a los que hace referencia ese artículo, todos los documentos técnicos disponibles para el desarrollo del proyecto. Lo cual resulta claramente aplicable a

<sup>29</sup> Juan Carlos Henao. "El Daño". Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2007. Pág. 197.

<sup>30</sup> Iván Darío Gómez Lec. "El Derecho de la Contratación Pública en Colombia". Bogotá. Ed. Legis S.A. 2012. Pág. 2.

los proyectos de infraestructura de transporte que pretendan ejecutar las entidades del sector transporte.

En concordancia con lo anterior, el parágrafo 3 del artículo 2 del proyecto de decreto reglamentario, establece que las entidades contratantes, cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en forma previa a la apertura del proceso de selección o a la firma del contrato, deberán contar los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental.

Lo anterior quiere decir que en los procesos contractuales en que se pretenda hacer uso del procedimiento administrativo especial que se pretende reglamentar, deben observarse las normas del Estatuto General de Contratación Pública, y en aquellos eventos en que no sean aplicables deberán igualmente observarse los principios de la función pública, del control fiscal y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Cordialmente,

**GERMÁN CARDONA GUTIÉRREZ**

Ministro de Transporte

Anexo En medio magnético, estudio sobre la expropiación en el ordenamiento jurídico colombiano, y el texto del proyecto de decreto reglamentario de las algunas de las disposiciones contenidas en las leyes 1450 y 1474 de 2011.

2012

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE CONTRATOS

CONTRATO No.

147 DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de Servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el sector transporte.

ACTA No

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

12  
(Día)  
11  
(Mes)  
DE  
DE  
DICIEMBRE  
(Mes)  
DE  
2011  
2012

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	12 de Diciembre de 2011 - 11 Enero de 2012	12 de Enero de 2012 - 11 Febrero de 2012	12 de Febrero de 2012 - 11 marzo de 2012	12 de Marzo de 2012 - 11 Abril de 2012
1	Preparación de los proyectos de actos administrativos requeridos para reglamentar o ratificar la expropiación, ratos de servicios públicos y sistemas inteligentes de transporte de la Ley 1450 de 2011, y los demás que sean requeridos por el supervisor del contrato	1. Se realizó estudio jurídico referenciado en marco conceptual sobre expropiación y traslado de derechos de servicio públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte. 2. Se realizó la primera propuesta de artículo del decreto mediante el cual se reglamenta la expropiación y traslado de derechos de servicios públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte. 3. Se participa en reunión con el equipo de trabajo del Ministerio los días 22 y 23 de Diciembre de 2011, en la cual se hacen los lineamientos para la reglamentación de la expropiación de bienes inmuebles y el traslado de las Redes de servicios públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte. 4. Se realiza la segunda propuesta de artículo del Decreto mediante el cual se reglamenta la expropiación y el traslado de derechos de servicio público domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte, luego de las reuniones llevadas a cabo con el equipo de Ministerio los días 23 y 28 de diciembre 2011.	1. Se realizó un estudio jurídico referenciado en un marco conceptual sobre expropiación en proyectos de infraestructura de transporte con el fin y en ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución. 2. Se realizó un estudio preliminar de las disposiciones que regulan la expropiación de bienes inmuebles en materia de transporte, en tanto administrativa como judicial, se hacen los lineamientos para la reglamentación de la expropiación. 3. Se hizo estudio jurídico de la propuesta de artículo del decreto presentada por el INVIAS mediante el cual se reglamenta la expropiación. 5. Se estudió la propuesta de artículo del decreto presentada por el IGAC mediante la cual se reglamenta la expropiación de bienes inmuebles en proyectos de infraestructura de transporte.	1. Se presentaron varias propuestas de artículo del decreto con el fin de consolidar los distintos puntos de vista de los funcionarios que hacen parte de las mesas de trabajo. Lo anterior con la finalidad de expedir un decreto para asegurar la ejecución de las disposiciones contenidas en el artículo 83 de la Ley 1450 y en el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, las cuales regulan un procedimiento administrativo especial en materia de expropiación de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte. 2. Las propuestas fueron presentadas con anterioridad a cada una de las reuniones de la mesa de trabajo con el fin de que las entidades del sector transporte pudiesen formular los respectivos comentarios, sea para la modificación que se empare con el fin de consolidar un texto definitivo del decreto reglamentario de la Ley 1450 de 2011 y de la Ley 1474 de 2011 en relación con la expropiación administrativa de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.	1. Se presentó propuesta definitiva de artículo del decreto, en la cual se consolidaron los comentarios y observaciones presentados por los funcionarios que hacen parte de las mesas de trabajo. Lo anterior con la finalidad de que el Gobierno nacional apruebe un decreto para asegurar la ejecución de las disposiciones contenidas en el artículo 83 de la Ley 1450 y en el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. 2. Antes de haberse presentado la propuesta final del proyecto de artículo del decreto se presentaron varias que fueron remitidas electrónicamente a los funcionarios de los distintos entes del sector transporte con el fin de no solo responder a sus interrogantes sino de consolidar el texto definitivo del decreto reglamentario de la Ley 1450 de 2011 y de la Ley 1474 de 2011 en relación con la expropiación administrativa de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.
2	Asistir a las mesas de trabajo que fijen las políticas institucionales o sectoriales y proyectar las actuaciones que se requieran, revisar jurídica e institucionalmente las propuestas de este grupo	Se llevó a cabo reunión con el equipo del Ministerio de Transporte los días 23 y 28 de diciembre de 2011, en la cual fueron fijados los lineamientos para la reglamentación de la expropiación de bienes inmuebles y el traslado de derechos de servicios públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte. De acuerdo a lo convenido por la Viceministra María Constanza García, se hará parte del grupo que trabajará la reglamentación de la Ley APP, Acuerdo del Incentivo Privado	Asistí a varias mesas de trabajo con el equipo del Ministerio de Transporte los días 24 y 31 de enero de 2012, en las cuales fueron fijados los lineamientos para la reglamentación de la expropiación de bienes inmuebles en proyectos de infraestructura de transporte. Asistí a una reunión con el Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y con la viceministra para infraestructura de transporte María Constanza García el 24 de enero de 2012, en la cual el IGAC manifestó estar dispuesto a cumplir con las funciones que le fueron asignadas por el Plan Nacional de Desarrollo en materia de expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura de transporte.	Asistí a varias mesas de trabajo con el equipo del Ministerio de Transporte los días 28 de febrero, 6, 7 y 8 de marzo de 2012, en las cuales fueron elaborados los distintos proyectos de artículo y se fijaron los lineamientos necesarios para la reglamentación de la expropiación de bienes inmuebles en proyectos de infraestructura de transporte.	Asistí a la reunión del 13 de marzo de 2012, en la cual fue debatida la propuesta final del proyecto de artículo del decreto reglamentario de la Ley 1450 de 2011 y de la Ley 1474 de 2011 en relación con la expropiación administrativa de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.
					1. Elaboré una propuesta definitiva de artículo del decreto, en la cual se consolidaron los comentarios y observaciones presentados por los funcionarios que asisten a la reunión del 17 de abril en las instalaciones del Ministerio de Transporte. Lo anterior con la finalidad de que el Gobierno nacional expida un decreto para asegurar la ejecución de las disposiciones contenidas en el artículo 83 de la Ley 1450 y en el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, las cuales regulan un procedimiento administrativo especial en materia de expropiación de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte. 2. Luego de ser aprobado el texto final del artículo del decreto por parte de las entidades del sector transporte, se elaboró un oficio diligenciado por la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 39 del Decreto Ley 19 de 2012.

3	Preparar la reglamentación que solicite el señor Ministro de Transporte y participar en las reuniones de análisis y mejoramiento de los mismos	Se anexo escrito relacionado al tema de contratos Apto, sus implicaciones y excepciones de reglamentación	Se hizo estudio jurídico de la propuesta del anteproyecto del decreto presentado por el INVIAS mediante el cual se reglamentaría la expropiación de bienes inmuebles en proyectos de infraestructura de transporte, en la reunión llevada a cabo en el despacho de la Viceministra de Infraestructura con el equipo del Ministerio de Transporte el 1º de febrero de 2012. Así mismo, se hizo a cabo un estudio de la propuesta del anteproyecto del decreto presentado por el IGAC mediante el cual se reglamentaría la expropiación de bienes inmuebles en proyectos de infraestructura de transporte, luego de la reunión llevada a cabo con las instalaciones del IGAC con el equipo del Ministerio de Transporte el 14 de febrero de 2012.	En un solo documento se consolidaron los distintos comentarios que fueron formulados por los funcionarios antes mencionados.	
4	En cumplimiento del objeto contractual ejecutar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato		Se elaboró un estudio de la Ley 1508 de 2012, a Ley de Asociaciones Públicas Privadas, el cual queda plasmado en un documento que fue remitido a la Viceministra de Infraestructura.		
5	Rendir informes mensuales por escrito al supervisor del contrato sobre las actividades adelantadas y de su gestión.	Se presenta informe escrito con la descripción de las actividades y anexos respectivos	Se presenta informe escrito con la descripción de las actividades y los anexos respectivos.	Se presenta informe escrito con la descripción de las actividades y los anexos respectivos.	Se presenta informe escrito con la descripción de las actividades y los anexos respectivos.

AVALADO POR:

NOMBRE: WILDE ALEXANDER CORDONADO

NOMBRE:

Cargo: JEFE OFICINA ASSESORA DE PLANEACION

Cargo:

CONTRATISTA ABOGADO

IVAN DARIO GOMEZ LEE

CONTRATISTA ABOGADO

262

[illegible]

MES O PERIODO DE PAGO	VALDR SERVIDO SIN INCLUIR IVA	40% DEL VALOR PAGADO V/R. BASE DEL LIQUIDACION APORTES	V/R.12.5% SOBRE VALOR BASE (40%) PARA SALUD	V/R.16% SOBRE VALOR BASE (40%) PARA PENSIÓN	V/R.APORTES PAGADOS POR EL CONTRATISTA -EN SALUD	V/R.APORTES PAGADOS POR EL CONTRATISTA-EN PENSIÓN	V/R DIFERENCIA - APTES SALUD - EN CONTRA O A FAVOR DEL CONTRATISTA	V/R DIFERENCIA - APTRE EN PENSIÓN EN CONTRA D A FAVOR DEL CDNTRATISTA
1	2	3	4	5	6	7	B COL. 4 MENOS COL. B	C COL. 8 MENOS COL. 7
12-dic-2011 y el 11-jane-2012	10.775.862	4.310.345	538.793	689.655	-	-	(538.793)	(689.655)
12-sne-2012 y el 11-feb-2012	10.775.862	4.310.345	538.793	689.655	-	-	(538.793)	(689.655)
12-feb-2012 y el 11-mar-2012	10.775.862	4.310.345	538.793	689.655	-	-	(538.793)	(689.655)
12-mar-2012 y el 11-abr-2012	10.775.862	4.310.345	538.793	689.655	-	-	(538.793)	(689.655)
12-abr-2012 y el 11-may-2012	10.775.862	4.310.345	538.793	689.655	-	-	(538.793)	(689.655)
OBSERVACIONES:	Aporte más de veinticinco (25) SIMMLV en salud y pensión, por lo tanto no aporte para este contrato ningún valor.	63.879.310	21.561.724	2.693.966	3.449.276	-	(2.693.966)	(3.449.276)

FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRAISTA

**CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PAGO DE APORTES POR EL AREA FINANCIERA**

## REVIEWS

COORDINADOR CONTABILIDADE

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Bogotá D.C., 13 de mayo de 2012

RECEIVED  
BOGOTÁ D.C. 13 de mayo de 2012  
263

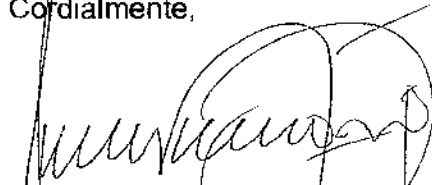
Señores

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

Respetados señores,

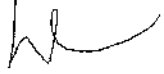
Para los fines establecidos en el artículo 4º del Decreto 2271 de 2009 y el Estatuto Tributario, certifico bajo la gravedad de juramento, que el documento soporte del pago de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, alcanza el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponden a la totalidad de mis ingresos. Por lo tanto no estoy en la obligación de cotizar un valor superior.

Cordialmente,



**IVAN DARIO GOMEZ LEE**

C.C. 80. 410.929 de Bogotá D.C.



864

Fecha de Pago	4/17/2012 12:00:00 AM
Periodo Cotización Salud	4/2012
Empresa	Van Dair Gomez Lee
NT	80410928
Número de Radicación	8318913784
Número Autorización	1000000214
Número de Administradores	2
Número de Empleados	1
Total Pagado \$4,842,903.00	
Monto de Pago Pago en Cajas	
Monto 1091	

Código	NT	Nombre	Número de Incapacidad(es) y/o Incapacidad	Valor descontado en Incapacidades y/o Monto	Total Pagado	Nº de Afiliados
231001	800237940	Compendio			\$2,585,182.00	1
EPS005	800251440	Sanitas EPS		\$0.00	\$1,079,941.00	4

Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 8318913784, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de reci

**INFORME DE LABORES**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 147 de  
2011**

**CONTRATO No:** 147 de 2011  
**CONTRATISTA:** Iván Darío Gómez Lee  
**PERÍODO:** 12 de abril a 11 de mayo de 2012  
**SUPERVISOR:** Wilde Alexander Coronado Molano

**OBJETO DEL CONTRATO:**

Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en lo relacionado con el sector transporte.

**OBLIGACIONES DEL CONTRATO:**

1. Constituyen derechos y deberes del **CONTRATISTA**, para efectos del presente contrato los contenidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
2. El contratista se obliga al cumplimiento oportuno de todas las normas laborales legales y convencionales vigentes.
3. El contratista deberá cumplir con el desarrollo de las siguientes actividades:
  - a. Preparación de los Proyectos de actos administrativos requeridos para reglamentar lo relativo a la expropiación, redes de servicios públicos y sistemas inteligentes de transporte de la Ley 1450 de 2011, y los demás que sean requeridos por el supervisor del contrato.
  - b. Asistir a las mesas de trabajo que fijen las posiciones institucionales o sectoriales y proyectar las actuaciones que se requieran, revisar jurídica e institucionalmente las propuestas de este grupo.
  - c. Preparar la reglamentación que solicite el señor Ministro de Transporte y participar en las reuniones de análisis y mejoramiento de los mismos.
  - d. En cumplimiento del objeto contractual, ejecutará las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.

- e. Rendir informes mensuales por escrito al supervisor del contrato sobre las actividades adelantadas y de su gestión

**LABORES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:**

Por medio del presente hago entrega del quinto informe de actividades contractuales de acuerdo con el contrato N° 147 de 2011 suscrito con el Ministerio de Transporte. Este informe está compuesto por las obligaciones del mencionado contrato, una lista de actividades específicas y generales realizadas, la factura y los anexos respectivos. La relación de actividades es la siguiente:

Asistí a una reunión el 14 de abril de 2012, con el Dr. Edgar Chacón, de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, con el objeto de debatir algunos puntos importantes que debían ser incluidos en el texto final del Decreto.

Asistí a la reunión del 17 de abril de 2012 en el Ministerio de Transporte, con el Dr. Edgar Chacón, asesor jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, la Dra. Constanza García, viceministra de infraestructura, el Dr. Gian Carlo Suescun del Ministerio de Transporte y varios representantes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, en la cual fueron debatidos tres puntos principalmente en relación con la propuesta final del proyecto del articulado del decreto para la adquisición de bienes inmuebles para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, estos fueron: 1) La aplicación dual de la expropiación administrativa y de la judicial en los eventos de adquisición de inmuebles para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte; 2) Aplicación del nuevo procedimiento administrativo especial de expropiación para aquellos proyectos que se encuentran en ejecución con anterioridad a la expedición de la Ley 1450 de 2011 y 1474 de 2011; y 3) Fortalecimiento y cooperación de entidades como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER y la Dirección Nacional de Estupefacientes –DNE, con el fin de acelerar la adquisición de bienes que se encuentran a disposición de tales entidades, cuando los bienes inmuebles hagan parte de las coordinadas del proyecto de infraestructura de transporte.

De conformidad con lo expuesto en la reunión antes mencionada, elaboré una propuesta definitiva del articulado del decreto, en la cual se consolidaron los comentarios y observaciones propuestos por los funcionarios que asistieron a la reunión del 17 de abril en las instalaciones del Ministerio de Transporte. Lo anterior con la finalidad de que el gobierno nacional expida un decreto para asegurar la ejecución de las disposiciones contenidas en el artículo 83 de la Ley 1450 y en el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, la cuales regulan un procedimiento administrativo especial en materia de expropiación de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.

Iván Darío Gómez Lee

Así mismo, luego de ser aprobado el texto final del articulado del decreto por parte de las entidades del sector transporte, se elaboró un oficio dirigido a la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 39 del Decreto-ley 19 de 2012, disposiciones según las cuales para la creación de un trámite que afecte a los ciudadanos en las entidades del orden nacional, es necesario que la entidad justifique ante el DAFP la creación del trámite con el fin de obtener un concepto favorable para implementar el procedimiento respectivo. En dicho oficio se hace un estudio de los antecedentes, de la estructura del decreto y de la técnica jurídica utilizada la cual comprende: 1) Un análisis de régimen jurídico de la expropiación; 2) Una investigación de las normas que son aplicables en materia de expropiación para proyectos de infraestructura de transporte; 3) La articulación del nuevo decreto con el Código Contencioso Administrativo, Decreto-ley 01 de 1984 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011; 4) La regulación del tema de los avalúos en el marco del Código Civil; y 5) La aplicación de la Ley 80 de 1993, y en general de las normas que conforman el Estatuto General de Contratación Pública en Colombia.

Por último se elaboró un oficio con la misma estructura que al anterior, dirigido a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, con el fin de dar trámite al respectivo texto del decreto para que sea sancionado por el Presidente de la República, en uso de la potestad reglamentaria.

## ANEXOS

Anexo 1:

- Documento con los respectivos soportes, del presente informe.


Anexo 2:

- Factura N° 77 por valor de \$12.500.000

Anexo 3:

- Formato pago de seguridad social

Cordialmente,

  
**IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE**  
C.C. 80.410.929 de Bogotá

CONTRATO No. 147 DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de Servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el sector transporte.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

ACTA No

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO  
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

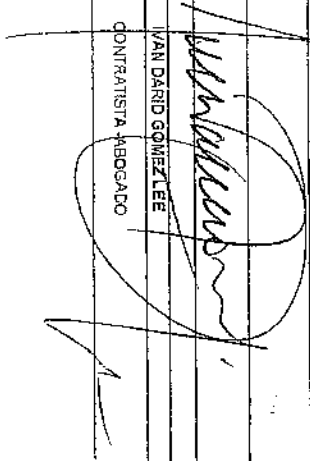
12	DE	2011
11	DE	2012
(Día)	DE	(Mes)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	12 de Diciembre de 2011 -11 Enero de 2012	12 de Enero de 2012 -11 Febrero de 2012	12 de Febrero de 2012 -11 marzo de 2012	12 de Marzo de 2012 -11 Abril de 2012	12 de Abril de 2012-11 de Mayo de 2012
1	Preparación de los proyectos de actos administrativos requeridos para reglamentar lo relativo a la expropiación, redes de servicios públicos y sistemas de transporte de la Ley 1450 de 2011, y las demás que sean requeridos por el supervisor del contrato	1. Se realizó estudio jurídico referenciado en marco conceptual sobre expropiación y traslado de redes de servicio públicos domiciliarios y T.C. en proyectos de infraestructura de transporte. 2. Se realiza la primera propuesta de artículo del decreto mediante el cual se reglamenta la expropiación y traslado de redes de servicios públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte. 3. Se participó en reunión con el equipo de trabajo del Ministerio los días 22 y 29 de Diciembre de 2011, en la cual se fijaron los lineamientos para la reglamentación de la expropiación de bienes inmuebles y el traslado de redes de servicios públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte. 4. Se realizó la seguridad propuesta del artículo del Decreto mediante el cual se reglamenta la expropiación y el traslado de redes de servicio público domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte, luego de las reuniones llevadas a cabo con el equipo del Ministerio los días 23 y 26 de diciembre 2011.	1. Se realizó un estudio jurídico referenciado en un marco conceptual sobre expropiación y proyectos de infraestructura de transporte con el fin y en ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el numeral 11 del artículo 188 de la Constitución Nacional para asegurar la ejecución de las disposiciones que regulan la expropiación de bienes administrativos como judicial, de bienes inmuebles e inmuebles en nuestro ordenamiento jurídico para llevar a cabo proyectos en diversos sectores de la economía nacional. 2. Se realizó un estudio normativo de las disposiciones que regulan la expropiación de bienes administrativos como judicial, de bienes inmuebles e inmuebles en nuestro ordenamiento jurídico para llevar a cabo proyectos en diversos sectores de la economía nacional. 3. Se asistió a la reunión los días 24 y 31 de Enero, en las cuales se fijaron los lineamientos para la reglamentación de la expropiación de bienes inmuebles y el traslado de redes de servicios públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte. 4. Se hizo estudio jurídico de la propuesta de artículo del decreto presentada por el INVIAS precable e, cual se reglamenta la expropiación de bienes inmuebles y el traslado de redes de servicios públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte. 5. Se estudio tampoco de la propuesta de artículo del decreto presentando por el IGAC, mediante el cual se reglamenta la expropiación de bienes inmuebles en proyectos de infraestructura de transporte.	1. Se presentaron varias propuestas de artículo del decreto con el fin de consensuar los distintos puntos de vista de los funcionarios que hacen parte de las mesas de trabajo. Lo anterior con la finalidad de expedir un decreto para asegurar la ejecución de las disposiciones contenidas en el artículo 83 de la Ley 1450 y en el parágrafo 1 del artículo 67 de la Ley 1474 de 2011, la cuales regulan un procedimiento administrativo especial en materia de expropiación de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte. 2. Las propuestas fueron presentadas con anterioridad a cada una de las reuniones de la mesa de trabajo con el fin de que las entidades del sector transporte pudieran formular las respectivas comentarios, sea fue la reunión de la Ley 1474 de 2011 y de la Ley 1450 de 2011 en relación con la consolidación de un texto definitivo del decreto reglamentario de la Ley 1450 de 2011 y de la Ley 1474 de 2011, en relación con la expropiación administrativa de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.	1. Se presentó propuesta definitiva de artículo del decreto, en la cual se consolidaron los comentarios y observaciones propuestos por las funciones que hacen parte de las mesas de trabajo. Lo anterior con la finalidad de que el gobierno nacional expida un decreto para asegurar la ejecución de las disposiciones contenidas en el artículo 83 de la Ley 1450 y en el parágrafo 1 del artículo 67 de la Ley 1474 de 2011, 2. Antes de haberse presentado la propuesta final del proyecto de artículo del decreto se presentaron varias que fueron ramificados electrónicamente a los funcionarios de las entidades del sector transporte con el fin de no solo responder a sus interrogantes sino de consolidar el texto definitivo de decreto reglamentario de la Ley 1450 de 2011 y de la Ley 1474 de 2011, en relación con la expropiación administrativa de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.	1. Elaboré una propuesta definitiva de artículo del decreto, en la cual se consolidaron los comentarios y observaciones propuestos por las funciones que asistieron a la reunión del 17 de abril en las instalaciones del Ministerio de Transporte. Lo anterior con la finalidad de que el gobierno nacional expida un decreto para asegurar la ejecución de las disposiciones contenidas en el artículo 83 de la Ley 1450 y en el parágrafo 1 del artículo 67 de la Ley 1474 de 2011, la cuales regulan un procedimiento administrativo especial en materia de expropiación de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte. 2. Luego de su aprobación el texto final del artículo del decreto por parte de las entidades del sector transporte, se elaboró un oficio dirigido a la Dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 39 del Decreto Ley 18 de 2012.
2	Asistir a las mesas de trabajo de fijación de políticas y acciones para la expropiación de bienes inmuebles y el traslado de redes de servicios públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte. De acuerdo a lo requerido por la Viceministra María Consuelo García, se hará parte del grupo que trabajara la reglamentación de la Ley APP, Acuerdo de Iniciativa Privada.	Se hizo a cabo reunión con el equipo del Ministerio de Transporte los días 23 y 26 de diciembre de 2011, en la cual fueron fijados los lineamientos para la reglamentación de la expropiación de bienes inmuebles y el traslado de redes de servicios públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte. De acuerdo a lo requerido por la Viceministra María Consuelo García, se hará parte del grupo que trabajara la reglamentación de la Ley APP, Acuerdo de Iniciativa Privada.	Asistí a varias mesas de trabajo con el equipo del Ministerio de Transporte los días 24 y 31 de enero de 2012, en las cuales fueron fijados los lineamientos para la reglamentación de la expropiación de bienes inmuebles en proyectos de infraestructura de transporte. Asistí a una reunión con el Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, y con la Viceministra para Infraestructura, doctora María Consuelo García el 24 de enero de 2012, en la cual el IGAC manifestó estar dispuesto a cumplir con las funciones que le fueron asignadas por el Plan Nacional de Desarrollo en materia de expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura de transporte.	Asistí a varias mesas de trabajo con el equipo del Ministerio de Transporte los días 24 y 31 de enero de 2012, en las cuales fueron fijados los lineamientos para la reglamentación de la expropiación de bienes inmuebles en proyectos de infraestructura de transporte. Asistí a una reunión con el Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, y con la Viceministra para Infraestructura, doctora María Consuelo García el 24 de enero de 2012, en la cual el IGAC manifestó estar dispuesto a cumplir con las funciones que le fueron asignadas por el Plan Nacional de Desarrollo en materia de expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura de transporte.	Asistí a la reunión del 13 de marzo de 2012, en la cual fue debatida la propuesta final del proyecto del artículo del decreto. Asistí a la reunión del 17 de abril de 2012 en el Ministerio de Transporte, con el Dr. Edgar Charón, asesor jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, la Dra. Constanza García, Viceministra de Infraestructura, el Dr. Carlos Suescun del Ministerio de Transporte y varios representantes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, en la cual fueron debatidos tres proyectos tipo del proyecto del artículo del decreto para la adquisición de bienes inmuebles para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, estos fueron: 1) La aplicación dual de la expropiación administrativa y de la judicial en los eventos de adquisición de inmuebles para la ejecución de proyectos de infraestructura	

692

3	Preparar la reglamentación que solicite el señor Ministro de Transporte y participar en las reuniones de análisis y mejoramiento de los mismos	Se anexo escrito relacionado al tema de contratos Atp, sus implicaciones y escenarios de reglamentación.	Se hizo estudio jurídico de la propuesta del articulado del decreto presentado por el INVIAS mediante el cual se reglamentaría la expropiación de bienes inmuebles en proyectos de infraestructura de transporte, en la reunión llevada a cabo en el despacho de la Viceministra de Infraestructura con el equipo del Ministerio de Transporte el 1° de febrero de 2012. Así mismo, se llevo a cabo un estudio de la propuesta del articulado del decreto presentado por el IGAC mediante el cual se reglamentaría la expropiación de bienes inmuebles en proyectos de infraestructura de transporte, luego de la reunión llevada a cabo en las instalaciones del IGAC con el equipo del Ministerio de Transporte el 14 de febrero de 2012	En un solo documento se consideraron los distintos comentarios que fueron formulados por los funcionarios antes mencionados.	
4	En cumplimiento del objeto contractual, ejecutar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato		Se elaboro un estudio de la Ley 1508 de 2012, o Ley de Asociadores Públicos Privada, el cual quedó plasmado en un documento que fue remitido a la Viceministra de Infraestructura.		
5	Rendir informes mensuales por escrito al supervisor del contrato sobre las actividades adelantadas y de su gestión.	Se presentó informe escrito con la descripción de las actividades y los anexos respectivos.	Se presentó informe escrito con la descripción de las actividades y los anexos respectivos.	Se presentó informe escrito con la descripción de las actividades y los anexos respectivos.	Se presentó informe escrito con la descripción de las actividades y los anexos respectivos.

AVALADO POR:		ELABORADO POR:	
NOMBRE	WILDE ALEXANDER DORONADO	NOMBRE:	IVAN DARIO GOMEZ LEE
Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Cargo:	CONTRATISTA ABOGADO



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
CONTABILIDAD  
CONTROL PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD-PENSION) PERSONAS NATURALES

[illegible]

**CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PAGOS DE APORTES POR EL AREA FINANCIERA**

FIRMA INTERVENIDOR Y/O SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRATISTA

REVISO

**COORDINADOR CONTABILIDAD**

**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



Bogotá D.C., 13 de mayo de 2012

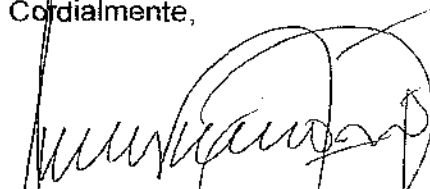
Señores

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

Respetados señores,

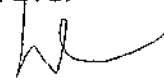
Para los fines establecidos en el artículo 4º del Decreto 2271 de 2009 y el Estatuto Tributario, certifico bajo la gravedad de juramento, que el documento soporte del pago de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, alcanza el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponden a la totalidad de mis ingresos. Por lo tanto no estoy en la obligación de cotizar un valor superior.

Cordialmente,



**IVAN DARIO GOMEZ LEE**

C.C. 80. 410.929 de Bogotá D.C.



RECEIVED  
271

**IVAN DARIO GÓMEZ LEE**

Abogado Experto en Contratación y Control  
Carrera 13 No. 96-67 Of. 503 Tel: 805 2019 Bogotá, D.C.

NIT: 80410929-7 Régimen Común  
Resolución DIAN 320000814426 de  
Fecha 16/08/2011 Numeración  
Autorizada IG 01 al IG 1000

**FACTURA DE VENTA**

**No. IG 0077**

FECHA: 12 de mayo de 2012

SEÑORES: Ministerio de Transporte

DIRECCIÓN: Avenida El Dorado C.A.N

TELÉFONO: 3240800

NIT/C.C. 899.999.055-4

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Quinto pago Contrato de Prestación de Servicios D. 147 de 2011		12.500.000

La presente puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su conformidad de acuerdo al Artículo 640 del C. de C. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y prestación del servicio.

SON: Doce millones quinientos mil pesos M/cte

SUBTOTAL \$	10.775.862
IVA	1.724.138
TOTAL \$	12.500.000

IVAN DARIO GÓMEZ LEE

FIRMA RECIBIDO NIT/CC.

273

Fecha de Pago	4/17/2012 12:00:00 AM
Periodo Cotización Salud	4/2012
Empresa	Ivan David Gomez Lee
NI	50410929
Número de Redención	6318913784
Número Autorización	1000000214
Número de Administradores	2
Número de Empleados	1
Total Pagando	64,662,603.00
Medio de Pago	Pago en Cajas
Saludo	1001

Código	EXT	Colaborador	Número de Redención	Número de Empleados	Total Pagando	Número de Administradores
231601	800227940	Colaborador	6318913784	1	64,662,603.00	2
EPS005	800251440	Sonias EPS	1000000214	1	64,662,603.00	2

Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 6318913784, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de reci



Ministerio de Transporte  
República de Colombia  
NIT: 899.999.055-4

Prosperidad  
para todos

289

MEMORANDO

20121210106693



20-06-2012

Bogotá, D.C., 20-06-2012

PARA: Dra. ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA - Coordinadora Grupo Contratos

DE: Supervisor Contrato 147 de 2011

ASUNTO: Acta de Suspensión

Para los fines pertinentes envío a usted el Acta de Suspensión del contrato 147 de 2011, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el sector transporte".

Cordialmente,


**WILDE ALEXANDER CORONADO MOLANO**  
Supervisor

Anexo: Tres (3) Folios

Lorena  
21/06/12

Proyectó: A. Mojica  
Elaboró: A. Mojica  
Revisó: W. Coronado  
Fecha de elaboración: Junio de 2012  
Número de radicado que responde: 20121210106693  
Tipo de respuesta Total( ) Parcial( )

21 JUN 2012

 Ministerio de Transporte	UNIDAD EJECUTORA _____	FIS 007		
	DEPENDENCIA _____	HOJA 1 de 3		
		FECHA		
		DIA 19	MES 06	AÑO 2012

**ACTA No. 07**

**DE SUSPENSION DE CONTRATO**

SUSPENSION ☒ AMPLIACION DE LA SUSPENSION ☐

**CONTRATO No. 147 de 2011**

**OBJETO DEL CONTRATO**

Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el sector transporte

**LOCALIZACION DEL PROYECTO** BOGOTÁ D.C.  
(Indique en este espacio el sitio donde se ejecuta el proyecto)

**PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO** SEIS (6) MESES  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**VIGENCIA DEL CONTRATO** \_\_\_\_\_  
(Indique la vigencia del contrato sujeta especificando días y meses según sea necesario)

**FECHA INICIACION DEL CONTRATO** 12 DE DICIEMBRE DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** \$ 75.000.000  
(Indique el valor inicial del contrato en números)

Setenta y cinco millones de pesos  
(Indique el valor inicial del contrato en letras)

**VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES \$** \_\_\_\_\_  
(Indique el valor inicial del contrato en números)

**GARANTIAS:**

AMPARO	No POLIZA O SU EQUIVALENTE (DECRETO 4828/2008)	VIGENCIA	CIA ASEGURADORA O SU EQUIVALENTE (decreto 4828/2008)
Cumplimiento del contrato de prestación de servicios	11-44-101028319	Desde 02/12/2011 Hasta 07/10/2012	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**CONTRATISTA** IVAN DARÍO GÓMEZ LEE C.C. No. 80.410.929  
(Escriba No de NIT y/o Cedula, nombre o razón social de contratista)

**SUPERVISOR** WILDE ALEXANDER CORONADO MOLANO c.c. No. 70.629.630  
(Indique el nombre del funcionario designado para ser el supervisor del contrato)

291

	UNIDAD EJECUTORA _____	FIS - 007		
	DEPENDENCIA _____	HOJA 2 de 3		
	FECHA			
		DIA 19	MES 06	AÑO 2012

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	PLAZO (Transcribir del contrato)	CAUSALES
	Cinco (5) días	Mediante comunicación del día 8 de junio de 2012, el contratista Dr. Iván Darío Gómez Lee, solicitó al supervisor del contrato 147 de 2011, una prórroga en plazo de cinco (5) días hábiles, dado que se requería realizar una reunión en el Ministerio de Transporte entre el 12 y el 15 de junio del presente año, para presentar al Ministro de Transporte el proyecto de Decreto Reglamentario en materia de expropiaciones.

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir del contrato)	CAUSALES

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2012  
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION DEL 20 DE JUNIO DE 2012  
PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO (Día) (Mes) (Año)

En BOGOTÁ a los DIECINUEVE ( 19 ) días del mes JUNIO de 2012

se reunieron IVAN DARIO GÓMEZ LEE, Contratista, y WILDE ALEXANDER CORONADO MOLANO,  
(Indique el nombre del representante legal o delegado de la firma consultora)

supervisor, con el fin de SUSPENDER el contrato anteriormente citado, de acuerdo con solicitud del  
(Suspenden/Ampliar la suspensión)

CONTRATISTA, según comunicación del 19 de JUNIO de 2012.

CAUSALES


Mediante comunicación del día 8 de junio de 2012, el contratista Dr. Iván Darío Gómez Lee, solicitó al supervisor del contrato 147 de 2011, una prórroga en plazo de cinco (5) días hábiles, dado que se requería realizar una reunión en el Ministerio de Transporte entre el 12 y el 15 de junio del presente año, para presentar al Ministro de Transporte el proyecto de Decreto Reglamentario en materia de expropiaciones, sin embargo a la fecha por Agenda del señor Ministro no ha sido posible llevar a cabo la reunión antes mencionada.

(Indique los motivos por los cuales se hace necesario suspender el contrato)

*Handwritten signature*

292

FOLIO: 1

 Ministerio de Transportes	UNIDAD EJECUTORA _____	FIS 007		
	DEPENDENCIA _____	HOJA 3 de 3		
		FECHA		
		DIA 19	MES 06	AÑO 2012

FECHA DE ULTIMA SUSPENSION \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

PLAZO TRANSCURRIDO \_\_\_\_\_  
(Indique los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE \_\_\_\_\_ Un (1) día  
(Indique los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha previa de reiniciación)

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Día) (Mes) (Año)

FECHA PREVISTA DE REANUDACION DEL CONTRATO \_\_\_\_\_ 22 DE JUNIO DE 2012  
(Día) (Mes) (Año)

FECHA PREVISTA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO \_\_\_\_\_ 22 DE JUNIO DE 2012  
(Día) (Mes) (Año)

El Contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato No 147 de 2011, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

El Contratista también se obliga a modificar las pólizas ampliando su vigencia por el término de la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECINUEVE (19) días del mes de JUNIO del año 2012.

(Firma) \_\_\_\_\_ (Firma) \_\_\_\_\_  
 (Nombre) \_\_\_\_\_ (Nombre) \_\_\_\_\_  
 Contratista Supervisor y/o Interventor

(Firma) \_\_\_\_\_  
 (Nombre) \_\_\_\_\_  
 Ordenador del Gasto o delegado

Original: Oficina Jurídica  
 Copia: Unidad Ejecutora  
 Copia: Interventor  
 Copia: Contralista



Ministerio de Transporte  
República de Colombia  
NIT: 899.999.055-4

Prosperidad  
para todos

MEMORANDO

20121200106683



20-06-2012

Bogotá.D.C., 20-06-2012

PARA: Dra. Isabel Cristina Vargas S. – Coordinadora Grupo Contratos

DE: Supervisor Contrato 147 de 2011

ASUNTO: Adición y Prórroga Contrato 147 de 2011

Para los fines pertinentes envío a usted la solicitud de Adición en valor por \$25.000.000 incluido IVA según C.D.P. 28012 del 15 de junio de 2012, y prórroga en plazo por dos (2) meses del contrato 147 de 2011 cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el sector transporte".

Para los fines pertinentes se adjunta la justificación de la solicitud de adición en valor y prórroga en plazo y el correspondiente CDP.

Cordialmente,

  
**WILDE ALEXANDER CORONADO**

Anexo: Cinco (5) Folios

Proyectó: A. Mojica  
Elaboró: A. Mojica  
Revisó: W. Coronado  
Fecha de elaboración: Junio 20 de 2012  
Número de radicado que responde: 20121200106683

*pendiente de recibir  
de la S. 2*  
*trabajo en progreso  
por el momento*  
*Lorena  
22 de Junio/12*

21 JUN 2012  
445



## JUSTIFICACIÓN

El Ministerio de Transporte requiere asesoría jurídica para el desarrollo de una estrategia de control de los recursos, para todas las entidades que hacen parte del sector transporte, en materia de contratación pública, buscando obtener los siguientes beneficios para el sector:

1. Contar con fórmulas para la adopción del sistema de control al control de la contratación implementado por diferentes órganos de control.
2. Lograr que el Ministerio de Transporte y el sector transporte en general, este a la vanguardia en las prácticas de control que han modernizado las instituciones de control.
3. Tener homologados los sistemas de información, los controles, los mecanismos de seguimiento y los instrumentos para combatir el fraude y la corrupción en materia de contratación pública en infraestructura en el sector de transporte, que es una de las locomotoras de desarrollo de este gobierno, garantizando así el buen uso de los recursos públicos.
4. Lograr el liderazgo del Ministerio de Transporte como modelo de control suscribiendo convenios o alianzas estratégicas con entidades nacionales o territoriales como la Auditoría General de la República, la Contraloría General de la República u otros organismos de control con organizaciones privadas nacionales e internacionales.

  
**WILDE ALEXANDER CORDNADO MOLANO**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación



Ministerio de Transporte  
República de Colombia  
NTT. 879.909.155-4

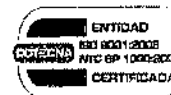
Prosperidad  
para todos

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20121050303391



14-06-2012



Bogotá D.C., 14-06-2012

Doctor  
IVAN DARIO GÓMEZ LEE  
Calle 114 A No 19 A 67  
Bogotá

Asunto: Aplicación en el Sector Transporte del Sistema de Control a los Controles para la Contratación Pública.

Doctor Gómez Lee:

El marco de competencias que confiere a un Ministro la Ley 489 de 1998, las normas de estructura básica de esta entidad y la necesidad de dar resultados en materia de infraestructura y servicios de transporte para el país, en un marco de eficiencia, transparencia y economía, imponen en este momento que un tema esencial de mi gestión al frente de este Ministerio sea el de impulsar una estrategia de control para todas las entidades que conforman el sector transporte.

Encuentro que uno de los Convenios que celebró este Ministerio para la colaboración interinstitucional fue con la Auditoría General de la República. Este Convenio ofrece el marco de acción general para que con el apoyo de ese organismo explore el Ministerio a mi cargo impulsar esta iniciativa. Y por esa misma vía intentar un acuerdo similar con la Contraloría General de la República.

Adoptar los sistemas de control a la contratación que los propios organismos de control aplican a sus vigilados, como es CCC, asegura situar al Ministerio y al sector a la vanguardia de las prácticas de control que han modernizado estas instituciones; así mismo, al homologar los sistemas de información, los controles, los mecanismos de seguimiento, y los instrumentos para combatir el fraude y/o la corrupción, asegura el cumplimiento de los fines de la contratación en infraestructura que es una de las locomotoras de este gobierno y garantizar además el buen uso de los recursos públicos.

En el marco de lo anterior y contando en este momento con sus servicios de asesoría solicito que formule una propuesta jurídica para adelantar la política del Ministerio en materia de control al Plan de Desarrollo, dándole así continuidad a su relación contractual, y asuma la tarea de preparar los actos administrativos que se requieran para este propósito, convocar las reuniones que sean necesarias para esta finalidad y demás actos preparatorios.

Avenida El Dorado CAN Bogotá, D. C. - Colombia - Teléfonos: (57+1) 3240800 Fax: (57+1) 4287354

<http://www.mintransporte.gov.co> E-mail: [mintrans@mintransporte.gov.co](mailto:mintrans@mintransporte.gov.co)

[quejasyreclamos@mintransporte.gov.co](mailto:quejasyreclamos@mintransporte.gov.co)

Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., línea gratuita Nacional  
01 8000 12042

286



Ministerio de Transporte  
República de Colombia  
NIT: 899.979.353.4

Para contestar cite:

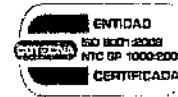
Radicado MT No.: 20121050303391



14-06-2012

RECEIVED  
UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN  
277

Prosperidad  
para todos



Estoy enviando copia de este memorando a los Viceministros, a la Secretaría General, a los Jefes de Oficina, Directores y Subdirectores para que estén enterados de este propósito y le presten a usted la colaboración que requiera para cumplir el mismo. El Director de Planeación en calidad de interventor del contrato realizará entonces los ajustes pertinentes.

Atentamente,

*Miguel E. Peñaloza B.*

MIGUEL E. PEÑALOZA B.  
Ministro de Transporte

C.C. Dra. María Constanza García Botero, Viceministra de Infraestructura.  
Dr. Felipe Targa Rodríguez, Viceministro de Transporte.  
Dra. Martha Lucía Pacilla López, Secretaria General.  
Dr. Juan Camilo Grajales Riveros, Director Infraestructura.  
Dra. Ayda Lucy Ospina Arias, Directora Transporte y Tránsito.  
Dr. Juan Fernando Palacios Cruz, Jefe Oficina Control Interno.  
Dra. Nelly Delgado Villami, Jefe Oficina Jurídica.  
Dr. Wilde Alexander Garcerán Molano, Jefe Oficina Planeación.  
Dra. Tatiana Andrea Orjuela Vega, Jefe Oficina Regulación Económica.  
Dr. David Boterra Fonseca, Subdirector Transporte.  
Dra. Lina Mara Huari, Subdirectora Tránsito (e).  
Dra. María Clemencia Angulo González, Subdirectora Talento Humano.  
Dr. Fernando González Rodríguez, Subdirector Administrativo y Financiero.

Proyectista: Liliana Patricia González Gómez  
Levanta: Liliana Patricia González Gómez  
Fecha de elaboración: 14/06/2012  
Número de radicado que respalda: 20121050303391  
Tipo de respuesta: Total(s) - Parcial(s)



UNIDAD EJECUTORA \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA \_\_\_\_\_

FIS - 005

HOJA 1 de 3

FECHA

DÍA  
20MES  
05AÑO  
2012

## SOLICITUD DE

ADICION EN VALOR ☒PRORROGA DEL PLAZO ☒ 878

## A. ANTECEDENTES

CONTRATO No

147

DE

2011

(Número de contrato)

(Año de suscripción)

## OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el sector transporte

## PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seis (6) meses

(Indique en este espacio el número de días y/o meses para ejecutar el contrato)

## FECHA INICIACION DEL CONTRATO

12

DE

Diciembre

DE 2011

(Día)

(Mes)

(Año)

## PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA DE SUSCRIPCION	TIEMPO
Adicional No. 1		Cinco (5) días hábiles

## SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO
Acta No. 07	Del 19 al 22 de junio

## FECHA DE TERMINACION ACTUAL

26

DE

JUNIO

DE 2012

(Día)

(Mes)

(Año)

## VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 75.000.000

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

## VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR (\$)

## VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 75.000.000

(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

## CONTRATISTA

IVAN DARÍO GÓMEZ LEE C.C. No. 80.410.929

(Escriba No de Nit y/o Cedula, nombre o razón social del contratista)

## SUPERVISOR

WILDE ALEXANDER CORONADO MOLANO c.c. No. 70.629.630

(Escriba No de Nit y/o Cedula, nombre o razón social del contratista)

## INTERVENIENTOR

(Escriba No de Nit y/o Cedula, nombre o razón social del interventor)



UNIDAD EJECUTORA \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA \_\_\_\_\_

FIS - 005 \_\_\_\_\_

HOJA 2 de 3

FECHA

DIA	MES	AÑO
20	06	2012

**B. OBJETO**

El presente documentos tiene por objeto solicitar al ordenador del gasto una **ADICIÓN Y PRÓRROGA** al  
(Indique si es solicitud de adición o prórroga)  
contrato anteriormente citado de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$25.000.000) M/CTE Y DE DOS (2) MESES  
(Indique el valor de la adición o el plazo de la prórroga solicitada)

**ESTADO FISICO**

Hasta el 20 de JUNIO de 2012, el proyecto presentaba un avance de ejecución  
del 98 % contra un avance programado del 100 %.

**C. ESTADO FINANCIERO**

Valor actual del contrato \$ 75.000.000  
(Indique el mes y año en que se actualizó)

Valor anticipo \$ \_\_\_\_\_

Valor amortizado \$ \_\_\_\_\_

Valor anticipo por amortizar \$ \_\_\_\_\_

**D. CAUSALES DE LA SOLICITUD**

De acuerdo con el Memorando 20121050303A91 del 14 de junio de 2012, el señor Ministro de Transporte, solicitó al contratista una propuesta jurídica para adelantar la política del Ministerio en materia de control al Plan de Desarrollo, asumir la tarea de preparar los actos administrativos que se requieran para este propósito, convocar las reuniones que sean necesarias para esta finalidad y demás actos preparatorios, dándole así continuidad a su relación contractual. El contratista envió la correspondiente propuesta, encontrándose ajustada a los requerimientos del Ministerio, por lo que se solicita la prórroga en plazo y la adición en valor.

Nota 1: Si es solicitud de adición, se anexa el acta de modificación de cantidades No \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ y los análisis de precios unitarios si se requieren.

Para el trámite de la presente solicitud se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 28012 del 15 de junio de 2012.

Nota 2: Si es solicitud de prórroga, se anexa la reprogramación de ejecución.

(Firma)

Nombre

Contratista



UNIDAD EJECUTORA \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA \_\_\_\_\_

FIS - 005

HOJA 3 de 3

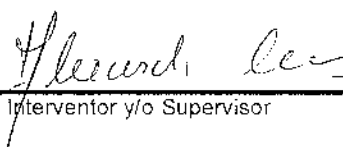
FECHA

DÍA  
20MES  
06AÑO  
2012**CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD**

DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, SE ENCUENTRA QUE  
RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO, POR LO QUE SE ENCUENTRA VIABLE  
LA ADICIÓN DE VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$25.000.000) M/CTE Y LA PRORROGA DE  
DOS (2) MESES

(Firma)

Nombre

  
Interventor y/o Supervisor

Visto Bueno

\_\_\_\_\_  
Ordenador del Gasto

Original: Oficina Jurídica

Copia: Interventor y/o Supervisor

Copia: Contratación

Copia: Unidad Ejecutora



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprabante

Usuario Solicitante: Elmer Alfonso Barraza Hernández

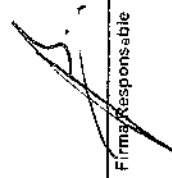
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2012-06-15-08:26 a.m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"									
Número:	28012	Fecha Registro:	2012-06-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Valor Actual:	25.000.000,00	Saldo x Comprometer:	25.000.000,00
Valor Inicial:	25.000.000,00	Valor Total Operaciones:							
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
Número:	28012	Fecha Registro:	2012-06-15	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
002 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL	C-410-600-27 LEVANTAMIENTO ACTUALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN POLÍTICAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE	Nación	TO	CSF		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Total:						25.000.000,00			

Objeto: ADICIÓN AL CONTRATO 147 DE 2011, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA JURÍDICA PARA ADELANTEAR LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y LA REGlamentación DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 - 2014"

JEFE DIVISION PRESUPUESTO  
IDENTIFICACION



Firma Responsable



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 37425442



12:06:15

Hoja: 1 de 1

Bogotá DC, 25 de junio de 2012

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilitaciones (SIRI), el(la) señor(a) IVAN DARIO GOMEZ LEE identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 80410929 :

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

### ADVERTENCIAS:

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilitaciones que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002)

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

### ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 1 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)  
Línea gratuita 018000910315; [dcap@procuraduria.gov.co](mailto:dcap@procuraduria.gov.co)  
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá DC  
[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



283

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y  
JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 25 de junio de 2012, a las 12:4:9, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	80.410.929 /
Código de Verificación	816601852012

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

  
CLAUDIA CRISTINA SERRANO EVERS

Última actualización Lunes, 16 de Enero de 2012

Síguenos en >    

## Consulta en línea de Antecedentes Judiciales

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/06/2012 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 80410929 y Nombres: GOMEZ LEE IVAN DARIO

**NO REGISTRA ANTECEDENTES**

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

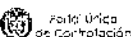
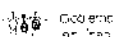
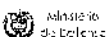
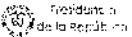

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

[Volver al Inicio](#)

[Manual de Navegación](#) [Políticas de Seguridad](#) [Políticas de Privacidad y Uso](#) [Mapa del Sitio](#) [LOGIN](#)

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA  
Carrera 5ª N° 24-31 - 2º AM - Bogotá DC  
Atención ciudadana de lunes a viernes de 8am a 12pm y 2pm a 5pm  
requerimientos ciudadanos 24 horas  
Unidad de Atención al Ciudadano Bogotá: (57) 31159112/1112 - Ruta del peón: 018000 910 600  
(02) (57) 3117581 E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



**Todos los derechos reservados 2011.**